C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CECILIO VALVERDE MAZUELAS

Sesión Plenaria núm. 62

celebrada el miércoles, 18 de junio de 1980

ORDEN DEL DIA (continuación)

Interpelaciones (continuación):

- De don Josep Subirats Piñana, del Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, sobre publicación por el Gobierno de una redacción completa de las normas afectadas por la Ley 6/1979 sobre Régimen Transitorio de la Imposición Indirecta («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie I, número 37, de 1 de febrero de 1980).
- De don Honorio Díaz Díaz, del Grupo Socialista, sobre política ganadera del Gobierno en relación con los problemas que afectan a la ganadería del país y, en particular, a la región asturiana («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie I, número 41, de 28 de febrero de 1980).

Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

- De la Comisión de Presupuestos, en relación con el Proyecto de Ley sobre concesión de un suplemento de crédito por importe de 300.000.000 de pesetas para atender obligaciones de funcionamiento del Parque de Automóviles de la Guardia Civil en 1978-79 («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie II, número 90, de 17 de junio de 1980).

- De la Comisión de Presupuestos, en relación con el Proyecto de Ley sobre concesión de un suplemento de crédito por un importe de 8.139.000.000 de pesetas, como subvención compensadora del déficit de explotación de RENFE en el ejercicio de 1979 («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie II, número 91, de 17 de junio de 1980).
- De la Comisión de Defensa, en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie II, número 92, de 17 de junio de 1980).

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 63, de 19 de junio de 1980.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.

Antes de entrar en el orden del día, el señor Vicepresidente (Rubial Cavia) da cuenta a la Cámara de que se ha incorporado a las tareas del Senado don Jordi Escolá i Vila, Senador de Convergencia i Unió.

Continúa el orden del día.

Interpelaciones (continuación):

—De don Josep Subirats Piñana, del Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, sobre publicación por el Gobierno de una redacción completa de las normas afectadas por la Ley 6/1979 sobre Régimen Transitorio de la Imposición indirecta 3007

*El señor Subirats Piñana explica su interpe-
lación. Le contesta el señor Ministro de Ha-
cienda (García Añoveros).*

*A continuación usan de la palabra los seño-
res Biescas Ferrer y Subirats Piñana, este
último en turno de rectificación. Seguida-
mente interviene de nuevo el señor Minis-
tro de Hacienda (García Añoveros).*

—De don Honorio Díaz Díaz, del Grupo Socialista, sobre política ganadera del Gobierno en relación con los problemas que afectan a la ganadería del país y, en particular, a la región asturiana. 3012

*El señor Díaz Díaz explica su interpelación. Le contesta el señor Ministro de Agricultura (Lamo de Espinosa y Michels de Cham-
pourcín). A continuación usan de la palabra los señores Casademont Perafita, Ball i Ar-
mengol, García Correa, Castro Uría y López González.*

*En turno de alusiones usa de la palabra el se-
ñor García Palacios, y para rectificar inter-
viene de nuevo el señor Díaz Díaz.*

*Seguidamente el señor Ministro de Agricul-
tura (Lamo de Espinosa y Michels de Cham-
pourcín) contesta a las intervenciones de los
señores Senadores que han hecho uso de
la palabra.*

Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

—De la Comisión de Presupuestos, en relación con el Proyecto de Ley sobre concesión de un suplemento de crédito por importe de 300.000.000 de pesetas para atender obligaciones de funcionamiento del Parque de Automóviles de la Guardia Civil en 1978-1979 3033

*En defensa del dictamen interviene el señor
García-Royo. Para una cuestión de orden
usa de la palabra el señor Duarte Cendán,
a quien contesta el señor Presidente.*

*Seguidamente interviene el señor Bustelo Gar-
cía del Real.*

A pregunta del señor Presidente se aprueba por asentimiento de la Cámara.

Página

—De la Comisión de Presupuestos, en relación con el Proyecto de Ley sobre concesión de un suplemento de crédito por un importe de 8.139.000.000 de pesetas como subvención compensadora del déficit de explotación de RENFE en el ejercicio de 1979 3035

En defensa del dictamen interviene el señor García-Verdugo Candón.

Seguidamente, y en turno de portavoces, intervienen los señores Casademont Perafita, Bustelo García del Real y Villodres García.

Sometido a votación el texto del dictamen de la Comisión, fue aprobado por 118 votos a favor y cinco abstenciones.

Página

—De la Comisión de Defensa, en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar 3039

En defensa del dictamen interviene el señor Martín Villa. A continuación usa de la palabra el señor Ministro de Defensa (Rodríguez Sahagún).

En turno en contra usa de la palabra el señor Pinilla Turiño.

A continuación intervienen en turno de portavoces los señores Duarte Cendán (Grupo Socialista Andaluz), Laborda Martín (Grupo Parlamentario Socialista) y Villodres García (Grupo Unión de Centro Democrático).

Página

Artículos 1.º a 4.º 3054

No habiendo sido objeto de votos particulares, se aprueban por asentimiento conforme al dictamen de la Comisión.

A continuación el señor Ferrer i Gironés defiende el voto particular presentado por el

Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, que postula la inclusión, conforme a la enmienda número 26, de un nuevo número 3 en el artículo 4.º Seguidamente interviene el señor Fombuena Escudero, por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático.

Sometido a votación el voto particular, fue rechazado por 56 votos a favor y 64 en contra.

A continuación el señor Presidente informa a la Cámara de las próximas reuniones plenarios y que la sesión continuará mañana a las once.

Se levanta la sesión.

Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.

El señor VICEPRESIDENTE (Rubial Cavia): Se encuentra entre nosotros un nuevo Senador que se ha incorporado a las tareas de esta Cámara, el Senador Jordi Escoda i Vila, Senador de Convergencia i Unió. (Aplausos.)

INTERPELACIONES (Continuación.)

— DE DON JOSEP SUBIRATS PIÑANA, DEL GRUPO CATALUNYA, DEMOCRACIA I SOCIALISME, SOBRE PUBLICACION POR EL GOBIERNO DE UNA REDACCION COMPLETA DE LAS NORMAS AFECTADAS POR LA LEY 6/1979 SOBRE REGIMEN TRANSITORIO DE LA IMPOSICION INDIRECTA

El señor VICEPRESIDENTE (Rubial Cavia): Seguidamente, vamos a continuar el orden del día donde se suspendió ayer. Corresponde la interpelación de don Josep Subirats Piñana, del Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, sobre publicación por el Gobierno de una redacción completa de las normas afectadas por la Ley 6/1979, sobre régimen transitorio de la imposición indirecta, publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie I,

número 37, de fecha 1 de febrero de 1980. El señor Subirats tiene la palabra.

El señor SUBIRATS PIÑANA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, la Ley del 28 de septiembre de 1979 sobre el Régimen Transitorio de la Imposición Indirecta, en su Disposición final primera, establece que el Gobierno publicará una redacción completa de las normas afectadas por la Ley, en el plazo de tres meses, a partir de su entrada en vigor, acomodando la numeración de los artículos a la nueva redacción.

Dicha ley entró en vigor el 1.º de octubre siguiente y, transcurridos tres meses sin darse cumplimiento por el Gobierno a la disposición mencionada, el 9 de enero, presenté la interpelación que hoy nos ocupa.

Cuando presenté la interpelación, hace ya más de seis meses, lo hice para recordar, para insistir, para presionar, para conseguir el cumplimiento. Sinceramente, siempre creí que esta interpelación no llegaría al Pleno del Senado. Creí, más bien, que la respuesta resultaría de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la redacción completa de las normas afectadas por la Ley del Régimen Transitorio de la Imposición Indirecta.

Sus Señorías recordarán que en la sesión de 4 de septiembre del año pasado, cuando se debatió el entonces proyecto de ley, expuse mis reparos al respecto. Dije que una ley que iba a entrar en vigor el 1.º de octubre siguiente y que afectaba a muchos colectivos, no podía, no debía por lo menos, aparecer con una redacción tan ininteligible. Dije que la redacción completa de las normas afectadas sería de utilidad antes de entrar en vigor la ley, en el momento de su aplicación. Dije, para no dogmatizar, que, al cabo de tres meses, después del desconcierto inicial, la redacción completa de las normas afectadas, sólo sería de utilidad académica.

No quiero recordar las modificaciones que se hicieron de la ley, antes de entrar en vigor, por Orden Ministerial, como fue el caso del lujo, origen, destino; ni sobre el solapamiento de fechas de la Ley y de la Orden Ministerial.

Se añadió confusión a la novedad, a la novedad que cada pieza de la Reforma Tributaria comporta; confusión, en mi opinión, innecesaria.

Diría que el Gobierno no podía enviar a las Cortes un proyecto de ley que no publicara la redacción completa de las normas afectadas. ¿Por qué? Porque el artículo 16 de la Ley General Tributaria establece que toda modificación de leyes y reglamentos tributarios contendrá una redacción completa de las normas afectadas.

La Ley General Tributaria fue incumplida por el Gobierno; era un motivo suficiente para devolver el proyecto de ley al Gobierno. Las Cortes, en actitud flexible ante el Ejecutivo, digamos que legalizaron el incumplimiento al aprobar la Disposición final primera citada, porque una ley ordinaria, como es la Ley General Tributaria, puede dejarse perfectamente sin efecto por otra ley ordinaria posterior.

Ello me recuerda la Reforma Tributaria de 1957, que se hizo mediante la Ley de Presupuestos, a pesar de la prohibición que establecía la célebre Ley de Administración y Contabilidad de 1911. A nivel doctrinal se convino que el grave defecto de técnica jurídica que suponía tal incumplimiento, fue subsanado por la Ley de Presupuestos, tan ordinaria como la de Administración y Contabilidad. Hoy esto no sería posible, porque la prohibición está contemplada en el artículo 134, 7 de la Constitución.

Explicando Política Fiscal, al estudiar la Ley General Tributaria en lo que se refiere a infracciones y sanciones, los alumnos nos preguntan, como en el caso del artículo 16; ¿y si la Administración no cumple? Yo les decía que el Ejecutivo no puede incumplir un mandato del Legislativo, recurso de queja aparte. El caso ya se ha dado. Con la contestación que reciba hoy podré ilustrar a los alumnos, que me temo quedarán decepcionados, como decepcionante es la nota a la segunda edición del Impuesto sobre la Renta y Sociedades, nueva legislación, del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Hacienda, que cuestiona el quehacer de las Cortes, adjetivando la normativa de la Imposición sobre la Renta como poco rigurosa, con enfoques —dice—, diseñados con mejor o peor fortuna y que el Ministerio de Hacienda aborda la tarea reglamentaria en acuciante afán de colmar las incertidumbres y los vacíos que siempre presentan las disposiciones de rango legal

y que constituyen una de las inquietudes predominantes.

Podría recordar que aquí, en el Senado, el entonces proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, fue votado por el procedimiento de los dos tercios, procedimiento entonces reglamentario, evitando la presentación de enmiendas y el trámite de Comisión, ya que esta urgencia era deseada también por el Ministerio de Hacienda.

No se puede, por lo menos no se debe, cuestionar el rigor de un texto por el propio Ministerio de Hacienda que, de una manera u otra, también propiciaba su rápida aprobación.

Con esta interpelación también defiende el prestigio del Poder Legislativo y recuerdo el deber del Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir las leyes.

Añadiría que es positivo que la doctrina cuestione el rigor, en su caso, de las disposiciones emanadas de las Cortes, pero es desalentador que lo haga una publicación del propio Ministerio, publicación que tiene por objeto difundir la normativa tributaria, sobre todo cuando el Poder Ejecutivo, como ocurre hoy, ha de contestar a una interpelación para explicar por qué no se ha publicado, dentro ni fuera de plazo, la relación completa de las normas afectadas por la Ley sobre Régimen Transitorio de la Imposición Indirecta tal y como establece la Disposición final de la propia Ley y el artículo 16 de la Ley General Tributaria. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rubial Cavia): Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (García Añoberos): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, comenzaré por el final, por la alusión que ha hecho el Senador interpelante a una publicación del Ministerio de Hacienda. Quiero indicar lo siguiente: se trata de un texto editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Hacienda que no tiene carácter oficial; es una publicación del Ministerio que no tiene carácter oficial; que ese prólogo, en concreto, no lleva ninguna firma y ninguna ratificación oficial; que de los prólogos que aparecen en los libros de un

Servicio de Publicaciones no se responsabiliza, como es natural, el Ministerio, y pareciendo inadecuado que en un prólogo publicado por el Ministerio se dijeran esas cosas, se ha llamado la atención al funcionario responsable, una vez que fue descubierto; se ha retirado la edición y se ha sustituido por otra donde ha desaparecido el prólogo o las palabras, por lo menos, a que ha aludido el señor Senador, relativas a este prólogo. De manera que el problema en cuanto ha surgido, ha sido resuelto por el propio Ministerio, yo diría que casi por casualidad, antes de conocer lo que aquí iba a decir el Senador, señor Subirats.

En cuanto al fondo de la interpelación, tengo que decir lo siguiente: La Disposición final primera de la Ley 6/1979, de 25 de septiembre, sobre Régimen Transitorio de la Imposición Indirecta, contenía un mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, contados a partir del día 1.º de octubre de 1979, publicase una redacción completa de las normas afectadas por la citada Ley.

Con el fin de dar efectividad a dicho precepto, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, elaboró el oportuno proyecto de Real Decreto, remitiéndolo al informe preceptivo, según la Ley de Procedimiento, de la Secretaría General Técnica con fecha 23 de octubre de 1979, que lo evacuó con fecha 8 de noviembre del mismo año.

Recibidas las observaciones, se elaboró un nuevo proyecto, pero al modificar el anteproyecto inicial, pareció conveniente incorporar las modificaciones que, en los textos refundidos afectados, había introducido la Ley 39/1979, de 30 de noviembre, sobre Impuestos Especiales. Es decir, antes de terminar el plazo de tres meses para la refundición, otra nueva ley, la Ley de Impuestos Especiales, relacionada evidentemente con la anterior, modificaba el contenido normativo que había no que refundir, sino que ordenar (no es una refundición, sino una ordenación de normas) con objeto de que las nuevas normas no quedasen obsoletas desde el mismo día de su promulgación. Entendía el Gobierno que si durante el plazo concedido para la delegación —plazo de tres meses—, el mismo legislador venía a modificar las normas que han de ser objeto de refundición, debería enten-

derse modificada la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo de tres meses señalado por las Cortes Generales y que, en consecuencia, dicho plazo debería computarse a partir del día 1.º de enero de 1980, fecha de entrada en vigor de las disposiciones de la Ley de 30 de noviembre de 1979.

De todos modos, elaborado un segundo proyecto, que incorporaba ya las normas de la Ley de 30 de noviembre de 1979, con las modificaciones correspondientes, se remitió a la Secretaría General Técnica, por escrito de 4 de diciembre de 1979, dentro todavía del plazo inicial de los tres meses y la Secretaría General Técnica informó con fecha 10 de diciembre del mismo año, sin poner reparo al nuevo texto.

El expediente fue remitido al Consejo de Estado, para el informe preceptivo, con fecha 19 de diciembre de 1979, antes de terminar el plazo inicial de tres meses, aunque el Gobierno entendía que tenía tres meses a partir del 1 de enero, pero, de todos modos, sin terminar el plazo inicial de tres meses.

El Consejo de Estado informó el 27 de marzo de 1980 entendiéndolo, textualmente, que no procede someter al Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el cual se publica una redacción completa de las normas afectadas por la Ley 6/1979, teniendo en cuenta que ha transcurrido el plazo concedido para la refundición sin haberse ampliado ese plazo por la Ley 39/1979 ni contenerse en la misma delegación legislativa. Es decir, el Consejo de Estado nos dijo, en 27 de marzo, que desde el día 31 de diciembre no se podía publicar la refundición; a pesar de que al Consejo de Estado se le había remitido, ciertamente, en fecha próxima al final del tope considerado por el propio Consejo de Estado, en 19 de diciembre, y sin que considerara oportuno la prórroga al 31 de marzo, como estimaba el Gobierno.

Ante esta decisión del Consejo de Estado, el Gobierno no pudo publicar la relación, y además no podía hacer nada, puesto que según el Consejo de Estado no estaba habilitado para refundir. Por tanto, de algún modo, las Cortes Generales tienen la posibilidad —y me referiré a cuál es el trámite—, de pronunciarse sobre este tema; de que se publiquen unos textos refundidos o una refundición de los

textos, puesto que se está tramitando todavía en las Cámaras, como proyecto de ley, por procedimiento de urgencia, el Real Decreto-ley 2/1980, de 11 de enero, y en éste se incorporaba una disposición que permitía, precisamente, prorrogar el plazo de estas refundiciones.

No fue bien visto por el Congreso que un Decreto-ley prorrogara el plazo para hacer refundiciones en su caso, pero, como actualmente se tramita como proyecto de ley, sí que cabe la posibilidad de que en este proyecto de ley se incorpore la prórroga o la apertura de un nuevo plazo.

Yo, desde luego, puedo prometer que puesto que el texto está hecho, y la refundición de normas también, e incluso habría que remitirlo nuevamente al dictamen del Consejo de Estado, ya que el Consejo de Estado no se pronunció en cuanto al fondo, inmediatamente se publicará, si no ocurren más contrariedades como las que acabo de reseñar que, evidentemente, son contrariedades. Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE (Rubial Cavia): ¿Señores Senadores que quieran consumir algún turno? (Pausa.)

El señor Biescas tiene la palabra.

El señor BIESCAS FERRER: Señor Presidente, Señorías, en nombre del Grupo Socialista quiero intervenir adhiriéndonos a la interpelación presentada por el Senador Subirats, poniendo de manifiesto el incumplimiento en que ha incurrido el Gobierno al no publicar, dentro del plazo que marcaba la Disposición final primera de la Ley sobre el Régimen Transitorio de la Imposición Indirecta, todas las normas que se habían visto afectadas y que eran, tal como vamos a ver, de la suficiente entidad como para necesitar de esta nueva redacción.

Por una parte la Ley sobre Régimen Transitorio de la Imposición Indirecta modificaba el texto refundido del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas, de 29 de diciembre de 1966, en siete artículos; en la base imponible; en la repercusión del impuesto; en las exenciones; en varias Disposiciones finales y en todas las transitorias. Por otra parte, también se veían afectados los recargos provisionales sobre todas las operaciones sujetas al

Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas, en una serie de recargos provisionales que recogía la Ley de 19 de noviembre de 1975, que se modificaba en cuatro artículos más sus tipos y cuotas. Y, por otra parte una nueva Disposición, en este caso el texto refundido el Impuesto sobre el Lujo, que se aprobó por Decreto de 22 de diciembre de 1966, veía cómo se modificaban nada más que veinticinco artículos, aparte de la supresión de otros cinco.

Nosotros creemos que estas modificaciones eran de la suficiente entidad como para que fuera absolutamente necesario el cumplimiento de esta Disposición final primera, que completaba así una serie de actuaciones que eran completamente necesarias para asegurar realmente la publicidad de las leyes, principio que pasa, en esta época de inflación legislativa, por dar las mayores facilidades a los administrados, para que así puedan conocer las modificaciones que se introducen, bien por nuevas leyes o bien por modificaciones de la legislación anterior.

Los socialistas queremos insistir en las graves consecuencias que están teniendo los incumplimientos de estas normas en un Estado que se autocalifica de Estado de derecho, porque la falta de cuidado sobre esta serie de detalles está teniendo graves consecuencias sobre la propia credibilidad de la Reforma Fiscal.

Recientemente, y a través de distintos medios de comunicación, se ha insistido en la falta de coordinación que está teniendo el Ministerio de Hacienda cuando, por ejemplo, ha publicado unas normas aclaratorias del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas después de que en las grandes ciudades haya terminado el plazo de presentación de las declaraciones para una serie de administrados. Pensamos que si no se cuidan estos detalles, que si no se publican las normas y los textos refundidos como ha ocurrido en este caso, nada menos que la propia credibilidad de la Reforma Fiscal va a estar en juego, y que este tema es lo suficientemente importante como para que, con dictámenes o no del Consejo de Estado, teniendo en cuenta toda esta serie de modificaciones que se están introduciendo en cadena, se tenga un cuidado

exquisito en informar al administrado, y esto es lo que, en definitiva, nosotros pedimos.

El señor VICEPRESIDENTE (Rubial Cavia): ¿Turno de rectificación? (Pausa.)

El señor Subirats tiene la palabra.

El señor SUBIRATS PIÑANA: Muchas gracias, señor Presidente. Yo diría que es positivo lo que ha dicho sobre la retirada de la edición que contiene tan desafortunada nota, pero el hecho de enlazar este incumplimiento con la Ley de Impuestos Especiales me parece que es buscar un argumento tangencial. La negativa del Consejo de Estado la conocía y sabía que su argumentación coincidía con la mía: el retraso de haber presentado la redacción completa de las normas, pero en la contestación del Ministro se ha visto una explicación cronológica del por qué no se ha llevado a cabo, una promesa de que se intentará rectificar y, sobre todo, algo que me ha gustado, que dice que el texto ya está hecho, porque yo sé que algunas empresas privadas, no del Ministerio, ya en su día, por su cuenta, lo hicieron y yo he tenido ocasión de verlo.

Pero el ánimo nuestro, el mío en concreto, es que no pasen estas cosas, que se publiquen las normas completas antes de presentar la ley, como está mandado. Los plazos de las leyes los tengo apuntados, para hacer sucesivas interpelaciones si se incumplen y, si es necesario, que el Ministro venga y yo tomaré la palabra en este sentido.

Nada más, muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rubial Cavia): El señor Ministro tiene la palabra, si desea intervenir.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (García Añoberos): Sí, señor Presidente, quiero puntualizar una afirmación del Senador Subirats. Yo no sé qué textos habrán hecho las empresas privadas, pero lo que quiero decir es que los textos que propone el Ministerio de Hacienda no los hace ninguna empresa privada. Los textos legales y reglamentarios los hace el Ministerio con sus servicios. No es esto lo que ha dicho el señor Subirats, sino que había algunas empresas, pero quiero puntualizarlo por si acaso algún malintencionado, que también los hay, pudiera interpretarlo así.

En cuanto a unas alusiones que ha hecho el señor Biescas a modo de comparación con el tema del Impuesto sobre la Renta, sí que me interesa puntualizar algo. El Ministerio de Hacienda, en efecto, de acuerdo con las facultades interpretativas que tiene, ha aclarado cuestiones relativas al Impuesto sobre la Renta a principios de junio, y si es necesario volverá a aclarar otras el 27 de junio, o el 25 o el 23. El Ministerio aclara las cuestiones cuando se plantean, exactamente cuando se plantean.

Quiero indicar que por primera vez en la historia tributaria de este país se ha afrontado la liquidación de un Impuesto no sólo con la Ley y el Reglamento que preceptúa la ley, sino con una norma que incorpora, como de obligado cumplimiento para la Administración, el contenido de más de mil consultas vinculantes presentadas a la Administración, al Ministerio de Hacienda, en relación con el Impuesto sobre la Renta a lo largo de 1979. Más de mil consultas vinculantes. Esto está incorporado en una Orden Ministerial como criterios obligados para la Administración en la interpretación de la ley y, por tanto, los contribuyentes, respecto a los criterios del Ministerio, saben a qué atenerse (otra cosa es lo que en su día digan los Tribunales en los supuestos de discrepancia), precisamente porque sabíamos que un Impuesto de este tipo se enfrentaba en su primer año de aplicación con dificultades apreciables por parte de los contribuyentes.

Pero es que, además, se ha hecho un esfuerzo de información. No he oído todavía quejas de los servicios de información. Son más de 150 puntos fijos de información en todo el país y 80 puntos volantes en relación con el Impuesto, que han evacuado decenas de miles de consultas, y no ha habido quejas sobre el funcionamiento de estos centros de información. Y se ha hecho una campaña publicitaria intensísima para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de su obligación, la cual no es muy agradable en muchos casos, porque es obligación de pagar, y porque hay que rellenar unos papeles, que para los contribuyentes, en principio para muchos de ellos, resultan algo extraños y nosotros lo comprendemos.

Cuando surgen problemas de interpretación, que en el Ministerio, por muy listos que sean los funcionarios, ni siquiera se nos habían ocurrido, los resolvemos en el momento que se plantean, porque no vale decir que ya ha estado confuso para unos, que esté para otros. Si ha estado confuso para unos, cuando se ha planteado, lo resolvemos y ya está claro para los demás. Además, no quiero aludir aquí a los efectos recaudatorios que podía haber tenido el predominio de una cierta interpretación en uno de los temas planteados.

Quiero recordar o comunicar a Sus Señorías, por si algunos no lo saben, que, por ejemplo, el Internal Revenue Code, que tiene el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto de Sociedades en un texto, tiene ocho mil entradas, lo que llamaríamos artículos, conseguidos a lo largo de los años con aclaraciones de la Administración, con sentencias de los Tribunales, etc. Yo no aspiro a llegar a tanto, ni a someter a los contribuyentes españoles a la tortura de tener un texto con ocho mil artículos, pero, evidentemente, un texto nuevo —y los juristas aquí presentes saben que así es— plantea numerosos problemas interpretativos, y algunos no se le ocurren a nadie. La realidad es mucho más rica que la imaginación más calenturienta, incluso de las personas que han intervenido en el proceso legislativo. Cuando han surgido dudas con la suficiente fuerza o cuando han sido consultadas al Ministerio, las hemos resuelto. Ahora no hay ninguna, que yo sepa, y estamos a 17 ó a 18, no sé exactamente que día es hoy, para que el Ministerio tome esa actitud, pero si surgiera alguna, la resolveríamos el 25 o el 26, el día que fuera, porque las dudas hay que resolverlas cuando se plantean.

Nada más y muchas gracias.

— DE DON HONORIO DIAZ DIAZ, DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE POLITICA GANADERA DEL GOBIERNO EN RELACION CON LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA GANADERIA DEL PAIS Y, EN PARTICULAR, A LA REGION ASTURIANA.

El señor VICEPRESIDENTE (Rubial Cavia): Seguidamente vamos a pasar a tratar la

interpelación tercera del punto cuarto del orden del día, presentada por don Honorio Díaz Díaz, del Grupo Socialista, sobre política ganadera del Gobierno en relación con los problemas que afectan a la ganadería del país, y, en particular, a la región asturiana, publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, de fecha 28 de febrero de 1980.

El señor Díaz Díaz tiene la palabra.

El señor DIAZ DIAZ: Señor Presidente, Señorías, señor Ministro, en nombre del Partido Socialista Obrero Español me toca hoy presentar esta interpelación, y me voy a ceñir precisamente a los antecedentes que tengo a la vista.

A lo largo del año 1979 —según datos del «Boletín Mensual de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura», número 10, de octubre de 1979—, las importaciones de carne vienen aumentando de forma considerable. Así, en el primer semestre de 1979 se llevan importadas 44.808 toneladas, mientras que en el primer semestre de 1978 las importaciones ascendían a 14.829 toneladas.

El vacuno es la especie que más fuerte reducción ha experimentado en los precios de origen, es decir, los que percibe el ganadero. La carne para el ganadero bajó, en algunas zonas, hasta cien pesetas el kilo, en los últimos cinco meses, mientras que para el consumidor se mantiene al mismo precio.

El propio Ministerio de Agricultura reconoce la presente situación al dar los siguientes datos sobre las importaciones de carne, procedentes de la Dirección General de Aduanas, período de enero a junio, expresados de la siguiente manera: en cuanto a los productos, vacuno, número de animales, durante 1978, 2.258 toneladas; en 1979 subió a 48.296 toneladas. En millones de pesetas esto supone, en 1978, 144,9, mientras que en 1979 subió a 1.715,5. Carne de vacuno, en 1978, 14.829 toneladas; en 1979, 44.808. Lo que en millones de pesetas supone, en 1978, 1.837 millones, mientras que en 1979 subía a 5.462,5 millones.

Esta situación está provocando grandes perjuicios en el sector ganadero, un sector que, según los datos del dictamen sobre España de la Comisión de la Comunidad Económica Europea al Consejo y del informe

preparado por el equipo interministerial, va a ser uno de los más afectados, de persistir la situación actual, de cara a nuestra incorporación al Mercado Común. Esto adquiere relevancia cuando afirmamos que la contribución de este sector al producto agrario bruto fue de algo más del 40 por ciento en 1978; y además ocupa un capital inmovilizado muy importante económica y socialmente, sin apenas posibilidades de hacerlo líquido.

Nos encontramos en este momento con un sector ganadero nacional, y asturiano en particular, que se halla en la ruina, al borde del colapso total; donde la demanda del ganado vacuno de carne no existe; donde los precios son tan bajos que al ganadero sólo le quedan dos alternativas: o arruinarse si vende, o endeudarse si no lo hace, poniendo en peligro el futuro de su ganadería y de su familia.

Y todo ello, ¿por qué? La causa podemos encontrarla en varios factores, principalmente en las importaciones, los monopolios, en la comercialización y en factores de producción: en la ausencia, en resumen, de una política ganadera.

Pero los propios datos son más elocuentes todavía para reflejar esta situación de ruina en el sector ganadero. Así, mientras el censo de bovino de Asturias permanece invariable, la producción de carne de vacuno, según datos de la propia Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura en Asturias, ha disminuido entre el período 1977-1978 en un 9 por ciento, pasando de 40.309 toneladas en 1977 a 36.689 en 1978.

Si transformamos este análisis trasladándolo al resto del país, vemos, según datos que publica la propia Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura a través de su «Boletín de Estadística Agraria», que mientras en 1977 se producían 430.000 toneladas se pasaba a 391.000 toneladas en 1978; y si comparamos esto con 1979, refiriéndonos hasta el mes de julio de los tres períodos, dado que es el último mes del que poseo datos oficiales, vemos que de 252.000 toneladas producidas en 1977, pasamos a 228.000 en 1978 y a 213.000 toneladas en 1979. Mientras tanto hemos pasado en el período enero-junio de importar 14.829 toneladas en 1978

a 44.808 en 1979. Mientras las importaciones aumentan, la producción disminuye, y en tanto los propios costos de producción aumentan. Todo ello es aún más grave cuando apreciamos que el propio aumento de las importaciones no afecta al consumidor. La política importadora no repercute en la disminución de los precios al consumidor, con lo cual éste no obtiene rentabilidad alguna de ninguna especie.

Todavía podemos asomarnos a importantes cifras que demuestran de forma clara la situación de deterioro del sector ganadero del país: precio de la carne al ganadero (añojo); precio kilo vivo; mes; año. 144,74 pesetas en enero de 1979; 135,79 en agosto de 1979. Es decir, hay una disminución considerable en lo que obtiene el ganadero. Podemos decir que prácticamente se mantiene a la par del precio que tenía en 1978 en el mismo mes de agosto.

Mientras tanto los factores de costo de producción, en tres de los factores más importantes, como son los fertilizantes, piensos y mecanización, habían sufrido la siguiente alteración: factor de producción: 1978-1979. Porcentaje de aumento. Fertilizantes: 124,50 los 100 kg. en 1978; 155,20 en 1979; total, 24,65 por ciento. Piensos: 122,2 los 100 kg.; 133 en 1979; total, 9 por ciento. Mecanización: 117,7 en 1978; 186,30 en 1979; total, 58,62 por ciento.

Si pasamos a la realidad práctica de cotización de los mercados y ferias, nos encontramos de nuevo con datos que acreditan la ruina del sector ganadero. Así, en Asturias, región cuya población ganadera asciende a algo más del 25 por ciento del total de la población, siendo las más de las explotaciones mixtas, es decir, agropecuarias, nos encontramos con una constante que caracteriza los mercados ganaderos: los bajos precios, la abundancia de reses y las cotizaciones por debajo de lo esperado. Ya ocurrió así en los certámenes convocados en la segunda decena del mes de noviembre en Grado, Cangas de Onís, Pola de Lena, Posada de Llanes, Barzana de Quirós, Pola de Laviana, Somiedo e Infiesto, manteniéndose la tónica en el mercado semanal de Pola de Siero.

No quisiera cansar mucho a Sus Señorías, pero sí quiero confirmar con algunos escritos

en la prensa, todo lo que acabo de decir referente a los mercados tanto de Pola de Siero como los que acabo de enumerar.

«Mercado de Pola de Siero.

»Desastroso para los terneros mamones.

»Precios e impresiones del mercado de ganado de Pola de Siero celebrado los días 24 y 25 de marzo.

»Terneros mamones, mercado desastroso, llegándose al final a que los ganaderos ofertaron al tratante.

»Teneras vida. Este ganado está estabilizado.

»Novillas próximas. Continúa también la tendencia a la baja».

Otro escrito. No voy a leer en ninguno de ellos todo lo que traen, debido a que no quiero cansar a Sus Señorías.

«Cangas de Onís: mucha gente y pocas operaciones en la feria de primavera. (De nuestro corresponsal, Ramón A. Prada.) Pocas veces hemos comprobado tanto pesimismo al valorar los resultados de una feria: la del domingo en Cangas de Onís fue un desastre en cuanto a ventas se refiere.

»Más del 40 por ciento de los paisanos que llevaron el ganado a la feria —nos dice un entendido— se volvieron a sus casas sin haberles preguntado nadie a qué venían.

»Si hasta ahora había esperanzas de que mejorasen las cosas, por lo visto en la feria de primavera canguesa parece ser que ya se han agotado. En marzo los precios fueron bajos y se vendió poco, pero ahora los resultados fueron aún más desesperanzadores que entonces.

»Un comprador de Burgos se llevó un camionado aprovechando los bajos precios, pero hubo otros que pensaban comprar y, pese a pagarse muy bajo el ganado, no llenaron los camiones. Se conoce que esperan aún mayores bajas, y esto va a ser muy perjudicial para los campesinos.

»Los "xatinos", que hace poco valían de 15 a 20.000 pesetas, ahora no los compran ni por 6.000. No sé en qué va a parar esto».

«Las importaciones prueban la intención de eliminar al sector ganadero ante la entrada de España en la CEE.

»En varias ocasiones hemos tratado en esta página el problema de las importaciones agrícolas. Importaciones que han alcanzado en el

año 1979 la escalofriante cifra de 390.000 millones de pesetas, valor prácticamente igual al de las importaciones de productos petrolíferos. La cantidad más importante corresponde al capítulo de cereales y entre éstos los que se dedican a piensos. Las carnes alcanzan los 16.500 millones y los productos lácteos superan los 9.000. Las carnes y los productos lácteos proceden en un 82 por ciento del Mercado Común Europeo».

Creo que lo que vengo leyendo hasta ahora atestigua bastante el motivo de mi interpe-lación.

Sirva como ejemplo la oscilación de precios de vacas de carne en el mercado semanal de Pola de Siero, el más importante de los que semanalmente se realizan en el país en lo relativo al tráfico de carne. Utilizamos como fuente «el informe de precios y mercados de Pola de Siero», del Servicio de Extensión Agraria (Agencia Comarcal de Pola de Siero) y son datos referidos al último semestre de 1979.

Vacas de carne («tablajeras»), de 230 a 250 pesetas el canal los días 2 y 3 de julio —allí se celebra el mercado el lunes y el martes de cada semana—. El día 6 y 7 de agosto están entre 210 y 220 pesetas. El 8 y 9 de octubre, entre 200 y 210 pesetas. En esta misma fecha, las «chacineras» están entre 130 y 150 pesetas. Las «tablajeras», en los días 15 y 16 de octubre, siguen igual. Pero en los días 26 y 27 de noviembre están ya entre 190 y 200 pesetas, mientras que las «chacineras» están entre 90 y 150 pesetas en la misma fecha. En 3 y 4 de diciembre, las «tablajeras» están entre 190 y 200 pesetas y creo que luego bajaron a 180 pesetas en una semana, y las «chacineras» estaban entre 90 y 150 pesetas.

En el mismo informe, y bajo el epígrafe «impresiones generales de mercado», se puede leer algo que se repite con frecuencia, y es la observancia de una absoluta falta de demanda en el mercado y de posibilidades de venta.

Asturias, decíamos anteriormente, se ve claramente afectada por esta situación, ya que un aspecto importante del sector agrario es su creciente y progresiva especialización hacia la vertiente ganadera, hasta tal punto que la producción ganadera supera las tres

cuartas partes de la producción final agraria obtenida. Un informe titulado «La economía asturiana ante la autonomía regional», patrocinado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro, Colección Temas Económicos, basado en un informe realizado por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) para el Consejo Regional Preautonómico, nos habla de la necesidad de reorientación de la política agraria, afirmando que «dentro de la orientación de las explotaciones, la ganadería deberá ser la actividad prioritaria, existiendo como alternativas fundamentales la producción de carne o de la leche. La Región Asturiana se sitúa en una perspectiva muy favorable ante el futuro consumo de productos alimenticios, ya que la demanda se dirigirá cada vez más hacia los alimentos de mayor contenido proteínico, entre los que destaca fundamentalmente la leche y la carne de bovino. Habrá que orientar hacia la producción de la leche las zonas que presentan para ello condiciones excepcionalmente favorables. En cuanto a las zonas accidentadas de la región, que son mayoría, su porvenir estará en el lanzamiento de una ganadería extensiva tradicional bajo criterios técnicos modernos; la orientación hacia la producción de carne en estas zonas supondrá una revitalización de la ganadería extensiva autóctona».

Estas afirmaciones cobran mayor auge en la perspectiva del ingreso de nuestro país en la Comunidad Económica Europea.

En atención a todas estas consideraciones y antecedentes expuestos, se interpela al Gobierno en los siguientes términos:

¿Qué piensa hacer el Gobierno para paliar la ruina de las familias ganaderas asturianas, en particular y de los ganaderos del país en general? ¿Qué planes ganaderos tiene previsto el Gobierno para la Cornisa Cantábrica? ¿Se piensa hacer algún tipo de delimitación y reorientación entre zonas de producción de leche y zonas de producción de carne? ¿Por qué el Gobierno no tiene ya un plan ganadero de potenciación del sector, en el cual se prevean todos los cambios necesarios para llevar a un sector dramáticamente deprimido a un sector competitivo teniendo en cuenta que esta ruina ya hoy dramática se va a agudizar con la entrada de España en la Comu-

nidad Económica Europea, cuando el sector tiene posibilidades de productividad?

¿Tiene el Gobierno algún plan de cambio de los canales de comercialización? ¿Existe algún proyecto de inversión de fondos públicos en una cooperativización de la comercialización de la carne?

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para impedir las importaciones clandestinas? ¿Por qué los Sindicatos Agrarios no tienen participación en la adopción de decisiones sobre si se realizan o no importaciones?

En caso de llevarse a cabo importaciones deben existir precios garantizados que cubran los costos de producción a los ganaderos españoles y fuertes aranceles a las importaciones con el fin de evitar la competencia. Finalmente debe constituirse un organismo con participación de los Sindicatos Campesinos que decida en cada momento las oportunas medidas de inspección y control de importaciones y fraudes comerciales. ¿Tiene previsto algo el Gobierno en este sentido? ¿Cómo controla el Ministerio de Comercio para que las importaciones realizadas en tráfico de perfeccionamiento no se desvíen al consumo directo?

El señor VICEPRESIDENTE (Rubial Cavia): Muchas gracias, señor Díaz.

El señor Ministro de Agricultura tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA (Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, creo que el Senador Díaz debía haber comenzado felicitando a la Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura por la magnífica información que le proporcionamos, porque realmente todas las cifras, datos estadísticos y análisis que ha llevado a cabo los ha hecho con cargo a toda la información que el Ministerio de Agricultura proporciona mensualmente, quincenalmente, semanalmente, anualmente, y ello le permite disponer de una información muy amplia.

Sin embargo, yo tengo que decirle que las conclusiones que yo extraigo de la información no son exactamente las mismas que extrae el señor Senador, Y no son las mismas

porque hay partes de su discurso que no se corresponden estrictamente con la realidad de los hechos, que no se corresponden tampoco con las normas de regulación de campaña, ni con un análisis estricto de lo que han sido las normas de regulación de campaña a lo largo de los últimos tres años —puesto que él ha evocado los últimos tres años—, normas que se han venido cumpliendo a lo largo de estos últimos años, y en función de ellas también, ciertamente, hay que comprender algunas de las decisiones que se han tomado en materia de importación.

Comienza el señor Senador afirmando que las importaciones han sido muy fuertes a lo largo de los últimos años, que esto ha ocasionado un descenso en los precios muy significativo y, junto con ello, ha aludido también a los reglamentos de carnes y, en algún momento, incluso a las cifras de nuestra balanza comercial agraria, concretamente las cifras de importación global en relación con los productos petrolíferos.

Yo quiero decirle que no comparto su análisis de esta situación. Y le voy a explicar por qué no comparto el análisis de esta situación. En primer lugar, porque como Su Señoría conoce bien —y yo sé que este tema lo conoce bien—, en las regulaciones de campaña se fijan básicamente dos tipos de precios: el precio de garantía y el precio de intervención superior. El precio de garantía, que es el precio inferior al que, cuando llegan las cotizaciones del mercado, el FORPPA interviene; y el precio de intervención superior, que consiste en el precio límite superior, una vez alcanzado el cual la Administración interviene también, regulando en este caso a la baja el mercado, al igual que en el caso anterior la Administración interviene regulando al alza el mercado; es decir, mediante la adquisición de productos excedentarios en el primer caso, y mediante el lanzamiento al mercado en el segundo de los productos que han sido comprados anteriormente o que se han importado como consecuencia de que el mercado se encuentra en una tensión de precios altos.

Este es el mecanismo normal de regulación que Su Señoría conoce bien, y es el que se viene aplicando año tras año, en virtud del decreto de regulación de campaña. Pues bien, si Su Señoría analiza lo sucedido en las cam-

pañías 1977/1978 —y tengo los gráficos a disposición de Su Señoría—, 1978/1979 y 1979/1980, Su Señoría podrá comprobar lo siguiente. Por ejemplo, a partir de finales de febrero de 1978, los precios de la carne de vacuno se sitúan regularmente, mes tras mes, sin fallar un solo mes a lo largo del año, por encima del nivel del precio de intervención superior, es decir, por encima del nivel en el cual la regulación de campaña dice taxativamente que, si se alcanza, la Administración interviene lanzando producción al mercado para contener el alza de precios. Lo mismo sucede a lo largo del primer semestre de 1979, en el cual incluso ya hay una nueva regulación de campaña, y los precios vuelven a permanecer por encima del nivel del precio de intervención superior.

Con ello entramos ya en la campaña 1979/1980, en la cual, fundamentalmente a lo largo de 1980 se produce una situación inversa, se produce una situación en la cual un mejor mecanismo de regulación de campaña, regulando el vacuno mayor y la carne de añojo, como Su Señoría conoce, permite afinar algo más las medidas económicas, y permite empezar a manejar el volante de regulación que son las importaciones con mucho más cuidado, llegando a un momento incluso en que tales importaciones se paralizan, y se paralizan por el hecho simple y llano de que el precio —les digo el precio de referencia— en los mercados empieza a descender, apuntando a pegarse a la banda inferior, es decir, al nivel del precio de la banda.

Cuando esto sucede, naturalmente la Administración interrumpe la venta de carne, tanto procedente de «stocks» nacionales como de «stocks» de carne importada. Y buena prueba de ello es que si bien es cierto que las cifras de importaciones son la que Su Señoría ha aludido, y se han importado en razón del contenido de los decretos y de haberse alcanzado el nivel superior de los precios, es decir, el nivel de precio de intervención superior, no es menos cierto que cuando durante el año 1980 los precios empiezan a descender las importaciones se reducen automáticamente, quedando en este momento en cero.

Prueba de ello también es el volumen de importaciones del año 1980, en el primer trimestre, que representó en animales vivos na-

da más que el 5 por ciento, no de aumento, sino el 5 por ciento sobre las importaciones del año anterior, es decir, que se redujeron en un 95 por ciento; que las importaciones de carne de vacuno están en un 22 por ciento, o sea, que se redujeron en un 78 por ciento sobre el nivel correspondiente al año anterior. Y lo mismo le puedo decir con respecto a la carne de porcino, aunque por ser una carne a la que Su Señoría no ha aludido no voy a entrar en ella.

Lo que sí es cierto —y yo comparto la preocupación con Su Señoría— es que las cotizaciones de los mercados de carne han descendido a lo largo de los últimos meses. Esto es verdad, lo acusan todas las cifras del Ministerio y está en todos los boletines de información del Ministerio de Agricultura. Pero quiero decirle con toda sinceridad, que eso no puede imputarse a las importaciones, porque, como Su Señoría sabe bien, las importaciones son siempre beligerantes en sus variaciones, pero siempre neutrales en su cuantía. Lo que quiere decir que las importaciones inciden en el mercado de carne de vacuno cuando esa carne que está almacenada sale al exterior, sale al mercado, pero no influye para nada en el mercado si esa carne ha sido importada por la Administración y se encuentra almacenada en «stocks» permanentes, sin variación de «stocks».

Lo que sí ha ocurrido es que el consumo de carne de vacuno, señor Senador, está descendiendo, y eso lo sabe muy bien Su Señoría, y está descendiendo porque el primer producto alimenticio que sufre siempre en cualquier situación de dificultades económicas las consecuencias de tales dificultades, el primero es siempre, como decía antes, la carne de vacuno, porque es el producto, digamos, más de lujo —por utilizar una expresión, aunque no es correcta—, porque es el producto más caro, porque tiene otros productos sustitutivos más baratos y, por consiguiente, la reducción del consumo se produce siempre, en una primera fase, en el escalón correspondiente a la carne de vacuno. Y eso es lo que ha sucedido.

Ha sucedido eso paralelamente a otro fenómeno, que es que el volumen de sacrificios de carne de vacuno es cada vez mayor. Y eso también lo sabe Su Señoría, y está en las

cifras de las publicaciones que ha manejado de la Secretaría General Técnica. Le voy a recordar algunas. En enero de 1977, la producción mensual correspondiente a cabezas de ganado sacrificado era de 195.000 toneladas (estoy refiriéndome a todas las especies); en enero de 1978 prácticamente es la misma, 195.000 toneladas, pero en enero de 1979 estamos en 204.000 toneladas sacrificadas, y en enero de 1980, 220.000 toneladas. Es decir, ha habido un incremento de casi 30.000 toneladas de enero de 1977 a enero de 1979.

Si analizamos las cifras correspondientes a carne de vacuno, podrá comprobar Su Señoría que en enero de 1979 las cifras de sacrificios fueron de 31.000 toneladas, y en enero de 1980 de 36.000 toneladas, 5.000 toneladas más en un sólo mes. Lo mismo le podría decir con respecto a febrero. Tengo a su disposición las cifras, y éstas demuestran muy claramente que frente a 30.000 toneladas sacrificadas en febrero de 1977, 30.000 en 1978, 27.000 en 1979, se sacrificaron en febrero de 1980 33.000 toneladas. Y lo mismo le puedo decir con respecto al conjunto de todas las carnes: 173.000 toneladas en febrero de 1977, 184.000 en febrero de 1978, 184.000 toneladas en febrero de 1979 y 194.000 toneladas en febrero de 1980.

Hay, por tanto, como ve Su Señoría, un incremento muy sustancial de las cifras de sacrificio en carne de vacuno, de sacrificios en general en todas las carnes, y esto unido a una disminución de las cifras de consumo, especialmente en carnes de vacuno, es lo que está motivando el hecho que preocupa a Su Señoría, y que ha motivado su interpelación, que es el descenso de los precios a nivel de productor.

Pero todo ello hay que combinarlo con las cifras globales de importación. Su Señoría ha indicado aquí que las cifras, el volumen económico de la importación de productos agrarios es similar al de la importación de productos petrolíferos. Su Señoría sabe perfectamente que esto no es cierto. Ya sé que no lo afirma él, ya sé que lo afirma un recorte de prensa que nos ha leído, según nos ha explicado aquí; pero Su Señoría sabe perfectamente bien que no es verdad, que esas cifras no son así.

Pero, además, habría que decir otra cosa. En esta misma Cámara, no hace mucho tiem-

po, aproximadamente un año, decía que era un objetivo importante para nosotros la disminución del déficit de la balanza comercial agraria, y advertía que era muy importante y significativo para nuestros agricultores que se pudiera paulatinamente ir reduciendo ese déficit.

Pues bien, yo podría decir ahora que en el período enero-abril, correspondiente al año de 1977, el déficit de la balanza comercial agraria era de 17.000 millones de pesetas; en el año 1978, el déficit era de 6.500 millones de pesetas, y, señor Díaz, en el año 1979, el superávit —no déficit— era de 1.900 millones de pesetas, y en 1980 ese superávit es de 4.400 millones de pesetas. Y estoy comparando, desgraciadamente para mí, para mi razonamiento, el período enero-marzo de este año, y enero-marzo del pasado con enero-abril de los dos años anteriores. Si hiciéramos la correspondencia completa —no tenía las cifras a mano, pues cuando le oí su argumentación ha sido cuando he buscado estos datos en la cartera—, con los datos correspondientes al mismo período, vería Su Señoría que la posición es bastante mejor.

¿Qué significa todo esto? Significa que es cierto que los precios de la carne de vacuno han descendido al productor, y que hay una preocupación legítima en Su Señoría, como la hay en todos nosotros, pero también tendrá que reconocer conmigo que se están aplicando medidas importantes para tratar de contener la caída de los precios. ¿Qué medidas son esas? Lógicamente, si el Gobierno aplica el Decreto de regulación de campaña cuando los precios superan el límite superior, también lo aplica cuando rebasa, por abajo, los precios de garantía, es decir por el límite inferior. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno: está sencillamente comprando toda la carne de añojo que se ofrece, de las características estipuladas, a los precios de garantía fijados para el presente año. Y en la provincia de Su Señoría, en el período que va de la campaña de 1979, es decir, el último semestre del año pasado, hemos comprado canales por valor de 75 millones de pesetas.

¿Qué se puede hacer, entonces, ante una situación como ésta? Yo destacaría que una de las cosas que se pueden hacer es algo a lo que Su Señoría ha aludido, que me ha pa-

recido que era un endoso de responsabilidad hacia la Administración, y yo tengo que decirle que desde luego no lo acepto, porque en todo caso sería un endoso compartido de la Administración y de los ganaderos.

Su Señoría ha hecho una afirmación que me encanta escuchar, porque no la había oído, en términos generales, hasta ahora, referida al sector ganadero. Ha dicho que el sector tiene posibilidades de aumentar la productividad.

Esto es tremendo, porque hasta ahora toda la argumentación del sector ha sido siempre que, por estar prácticamente en el límite, todo el esfuerzo había que hacerlo a través de los precios.

Hemos venido defendiendo desde hace mucho tiempo que hace falta un esfuerzo paralelo, un esfuerzo en materia de precios de venta, de precios de coste y en las propias estructuras de producción, para que los costes, si es posible, sean cada vez más reducidos.

Por consiguiente, cuando Su Señoría pregunta qué piensa hacer el Gobierno para paliar la ruina, le diré que se están haciendo muchas cosas, como Su Señoría conoce. Yo no sé si es que me ha querido brindar a mí la posibilidad de que yo diga las que se están haciendo, y por eso no lo ha mencionado Su Señoría, en cuyo caso se lo agradezco.

¿Qué se está haciendo? En primer lugar, Su Señoría lo conoce bien, aplicar la regulación de campaña. Igual que se aplicaba para las importaciones, se está aplicando ahora para las compras en régimen de garantía; es decir, se ha cerrado la importación, se está comprando en régimen de garantía toda la carne que se ofrece al FORPPA y, por consiguiente, estamos manteniendo los precios en el límite inferior, en el límite de precios de garantía. Y quiero recordar a Sus Señorías que ese límite o precio de garantía fue negociado en su momento con las organizaciones agrarias.

¿Qué se está haciendo en segundo lugar? Habrá observado Su Señoría, por las informaciones que se han dado al aprobar la regulación de la campaña de cereales, que junto con un incremento del precio del maíz en un 11 por ciento, en un 10 por ciento el del trigo y en un 12 por ciento el de la cebada, se han acordado medidas muy impor-

tantes para que al ganadero, especialmente en la Cornisa, le lleguen los productos, los cereales pienso, a precios compensados. Es decir, a un precio que le permita mantener sus estructuras ganaderas, con un coste que probablemente durante esta campaña va a ser inferior al de la campaña pasada.

Tenemos la esperanza, con las medidas reguladas en el decreto de campaña, no sólo de estabilizar los costes de la ganadería, sino de producir incluso una ligera reducción en tales costes, lo cual permitiría al ganadero convivir con una situación de dificultad de mejor forma.

Además de eso, no olvide Su Señoría que estamos a punto de regular la próxima campaña de productos ganaderos. Una vez que se ha regulado la campaña de cereales, lo lógico es que ahora procedamos a regular la campaña de carnes, y en esa nueva regulación de campaña los ganaderos encontrarán, una vez más, mecanismos de seguridad en relación con su situación.

Su Señoría me pregunta si pensamos hacer algún tipo de delimitación entre zonas de producción de leche y zonas de producción de carne. Creo que la mejor respuesta a este planteamiento que hace Su Señoría está contenida en su propia argumentación. Ha leído que en algún momento los ganaderos en su provincia había escapado de la situación de dificultad de precios mediante una reorientación hacia el sector lácteo. Pues bien, tengo que decir que me parece que sería un error establecer, unas delimitaciones muy claras y tajantes, que la preocupación que hay y ese deseo de que el Gobierno tenga que decir siempre todo lo que hay que hacer no es bueno, que los ganaderos deben tener un margen de libertad, y en ese margen de libertad está el tema de la leche y el tema de la carne.

Me pregunta si vamos a adoptar algún tipo de decisiones teniendo en cuenta nuestra futura entrada en la Comunidad Económica Europea. Yo le digo que sí, que se está haciendo algo, pero también le digo —como vengo diciéndolo a nuestros interlocutores comunitarios desde hace mucho tiempo, y últimamente más, en razón de hechos de todos conocidos— que cuando España pide entrar en la Comunidad Económica Europea solicita in-

gresar en un núcleo de países que tienen unas normas de carácter agrario. Pues bien, si esas normas de carácter agrario, probablemente por razones internas de los propios países de la Comunidad Económica Europea, pueden ahora ser modificadas, nosotros debemos, a su vez, modificar nuestras estructuras o, mejor adaptadas, pero siempre sabiendo qué horizonte tenemos delante, dónde nos vamos a integrar.

Por consiguiente, en este momento lo mejor que podemos hacer con relación a este tema es lo que está previsto, lo que se está haciendo: elaborar entre el Ministerio de Comercio y el de Agricultura —como ya anuncié hace un año, y está recogido en el Plan Económico del Gobierno— los reglamentos objetivos de los productos, es decir, unos reglamentos donde estén las características básicas sobre las cuales se va a mover siempre el mercado de productos ganaderos, en particular éste.

Respecto a las importaciones, acerca de las cuales creo que ya he contestado, quisiera decir que tanto el Ministerio de Comercio como el de Agricultura y el de Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas, hemos venido persiguiendo el fraude y se han impuesto sanciones importantes en relación con aquellas partidas que habían sido detectadas de carnes clandestinas. Pero tengo también que decirle, supongo que para su satisfacción, que tales operaciones han sido escasas y, desde luego, absolutamente todas las que se han encontrado, tanto en el ámbito de la carne como en el de la leche, se han sancionado, y algunas sanciones se han hecho públicas hace escasos días. Esas operaciones han sido sancionadas con dureza.

Finalmente, en relación con el tema de estas importaciones, debo decir que las decisiones en materia de importación se toman como consecuencia de la regulación de campaña, y se toman así en España y en la Comunidad Económica Europea. Es decir, los reglamentos de la Comunidad o los Decretos en España que reglamentan una campaña en concreto fijan un precio techo, un precio de intervención superior, y cuando las cotizaciones del mercado alcanzan ese precio techo no hay que consultar a nadie, señor Díaz, sino que automáticamente se abren las importa-

ciones. Eso pasa en todos los países de la Comunidad Económica Europea y eso pasa en España, y le pongo como ejemplo la Comunidad Económica Europea porque es probablemente el área que mejor protege los productos ganaderos, como Su Señoría bien conoce, entre otras razones por el temor que a tales productos se le tiene desde España.

Esta es, pues, la situación. Yo creo que en relación con el futuro encontrará Su Señoría motivos de satisfacción importantes a partir del instante en que, junto con la regulación de la campaña de cereales ya aprobada, se apruebe la regulación de la campaña de carnes, en la cual lógicamente se regularán los precios de garantía y los precios de intervención superior, para que los ganaderos puedan continuar con el normal desarrollo de sus actividades.

Nada más, y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rubial Cavia): ¿Señores Senadores que quieran consumir algún turno? (Pausa.)

El señor Casademont tiene la palabra.

El señor CASADEMONT PERAFITA: Señor Presidente, Señorías, señor Ministro, mi intervención en este tema va a ser, más que en un aspecto político, en un aspecto profesional, porque como profesional de la carne creo que algunas cosas podré aportar y que de una crítica constructiva podrá salir algún planteamiento que el Gobierno podrá hacer, porque yo creo que precisamente el Ministerio de Agricultura es uno de los Ministerios que tiene unas ideas claras en el aspecto de la ganadería y de la carne, es un Ministerio dinámico en sus planteamientos y es un Ministerio claro en sus exposiciones y en la aportación de datos, como aquí ha quedado demostrado. Pero todas estas buenas intenciones que pueden existir en un Ministerio, cuando interviene la dualidad de poderes —y esto se da en la Administración española— y entra en colaboración o en contraposición el Ministerio de Agricultura y el de Comercio, aquí se arma el bollo y aquí empieza el sacrificar al agricultor, como el Senador Díaz ha estado exponiendo.

El Senador Díaz ha expuesto los problemas que tiene el sufrido ganadero, ha expuesto

unas causas, ha hablado de las importaciones y he oído que ha hablado de unos monopolios de importación de carnes. Yo aquí querría hacer una rectificación y diría que, más que por estos monopolios, estos defectos podrían subsanarse si, de una vez por todas, y cumpliendo precisamente lo establecido por el Gobierno en su Plan Económico, que prevé la privatización o la liberalización de todo el comercio de Estado, de toda la intervención que está haciendo el Gobierno, esto se hubiera dado en la carne, que es comercio de Estado; todos estos males del agricultor no hubieran tenido que darse, no se darían, y esto estaría arreglado. *(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)*

Yo no sé por qué esto se va demorando, y me da un cierto temor, ya sin hablar del famoso PEG, que creo que no fue más que un manual también de buenas intenciones. Pero creo que no hay ninguna intención de que, de una forma rápida, se ponga en marcha la desaparición del comercio de Estado. Y cuando hablo de desaparición del comercio de Estado, Senador Díaz, no quiero decir que la iniciativa privada haga todo lo que le parezca, sino que, al contrario, con una regulación de derechos aduaneros es por donde debe venir la protección al ganadero para que tenga los precios estables y pueda ganarse la vida como todo buen ciudadano.

Pero lo que ocurre es que el comercio de Estado está en unas manos —y perdónenme en qué manos está hoy, porque ha habido unos cambios— desgraciadas. Está en el famoso CAT, hoy con otra denominación, no hay duda, pero con la misma estructura, y en este organismo sí que se cuecen todos los desaguisados del comercio de la carne, del comercio de Estado.

Quizá nos pueda explicar el señor Ministro de Agricultura —y no me dirijo a él en este momento, sino al de Comercio, que no está presente— el porqué de estas compras irracionales. El Senador Díaz lo ha mencionado, con respecto al año pasado, de la carne de vacuno, con unos «stocks» impresionantes que están en cámaras y que ahora parece —y digo parece, porque no me consta exactamente— que van a canalizarse en una parte hacia la hostelería, con un fin bueno, porque no hay duda de que se va a intentar que

los precios para el turismo en el verano no se disparen. De esto no hay duda, pero una vez más se hace con el sacrificio del ganadero, porque se sacarán unos «stocks» comprados improcedentemente. Por ejemplo, cuando el Rey de España estuvo en Sudamérica, con todo lo de colaboración y ayuda al mundo iberoamericano (esta semana se ha tratado en esta Cámara), algo había que traer de allí, y se compraron unas partidas de carne, con sacrificio del ganadero español. Ayuda sí, pero pensando también en los ciudadanos españoles.

El señor Ministro nos ha hablado de los decretos de campaña. Están bien planteados, yo diría que bien negociados (nunca han sido muy conflictivos, y el señor Ministro ha llevado muy bien estas negociaciones), pero les falta agilidad en su aplicación.

El señor Ministro nos ha aclarado que el Senador Díaz no ha planteado el problema de la carne de cerdo, que sólo ha hablado de la carne de vacuno y, por tanto, en este tema se ha centrado.

Evidentemente se está comprando carne de añojo en estos momentos, pero no son ágiles estos movimientos, porque hay que regularlos, y desde que la carne llega a su precio mínimo de protección hasta que se pone en marcha todo ese mecanismo para poder canalizar su compra, aquí es donde el sufrido ganadero, el pequeño y mediano ganadero, empieza a perder muchísimo dinero. Digo esto porque realmente la carne de cerdo llega a la cota de ciento y no muchas pesetas, cuando el precio de protección es de 114, se intentó poner en marcha este mecanismo que estaba previsto y no pudo hacerse, porque cuando se dijo que se haría se subió la carne de cerdo. Aquí no hay que discutir los decretos de campaña, pero sí su puesta en marcha, su técnica, su mecanismo, que no es ágil, no es operativo. No es operativo porque cuando el ganadero pueda alcanzar el precio mínimo de cotización o de protección debería tenerlo ya pactado con el FORPPA para que pudiera llevar allí sus reses y cobrar este precio de protección. Esto no se hace y pasan siempre dos o tres meses, que son la pérdida, la ruina de esta ganadería, que va empobreciendo a este pequeño y mediano ganadero, que abandona su actividad y se va a otras,

como se ha visto en estos momentos y en Cataluña lo estamos padeciendo. Este pequeño y mediano ganadero se va a la industria, y cuando ha venido la crisis económica actual, la cifra de paro en Cataluña ha sido muy grande, por lo que estamos muy preocupados en estos momentos.

Hay otras cuestiones que podría plantear, también en plan de crítica constructiva. Está el tema de la normalización, en todos los aspectos, del comercio, y la transformación de los productos cárnicos. Digo que todo esto debería estar normalizado, porque así habría un incremento en el consumo de la carne que ayudaría en momentos como el actual. No hay duda que estamos sumidos, en estos momentos, en una grave crisis económica, que el consumo está bajando y todo ello también repercute en el campo. Pero si esta normalización de transformados se pusiera en marcha de una vez sin temor —y esto la industria lo está reclamando (es la industria la que está reclamando la normalización rápida de todos los transformados cárnicos)—, aquí habría también un sistema para la ayuda al pequeño ganadero.

Otra cuestión —el señor Ministro la ha planteado y el Senador Díaz también— es la incógnita de la incorporación a la Comunidad Económica Europea. Este es un tema del que, cuando se analiza si seríamos competitivos o no, si podríamos o no, si la ganadería española saldría con ventaja o desventaja, yo diría que saldría con ventaja si no ocurrieran unas circunstancias que, si se dieran en este mismo momento, la entrada en la Comunidad Económica Europea sería la ruina total para toda la ganadería española y la industria transformadora de productos cárnicos. ¿Por qué motivos? Pues porque en este país, desde hace más de quince años, tenemos el marchamo de la peste porcina africana, que nunca ha sido atacada con la diligencia y la valentía necesarias para erradicarla de una vez. ¿Y qué nos ocurriría en este momento? Que si en la negociación del Mercado Común no hay un Ángel de la Guarda que vele por esta cuestión, los productos cárnicos de Europa podrían venir a España y, en cambio, los de cerdo de España estarían vetados para entrar en el Mercado Común.

Esto es gravísimo y hay que atajarlo de

una vez; hay que plantearlo en la industria y en las Cámaras de Comercio. La Cámara de Comercio de Gerona así lo planteó a los negociadores que están gestionando el Tratado en la Comunidad Económica Europea. Se hizo la gestión y hay consignados 10 millones de unidades cuenta para atajar el problema de la peste porcina africana. Pero hace un año que está consignada esta ayuda y no se ha hecho nada, absolutamente nada, para poner en marcha los mecanismos, y perdóneme el señor Ministro cuando digo que no se ha hecho nada, porque me constan las intenciones que hay de hacerlo, pero falta no sé qué o no sé quién que sea valiente de una vez para decir: «Atajemos este problema, y atajémosle ahora». Esto hay que hacerlo, sobre todo de cara a la entrada en el Mercado Común, —que no sé en estos momentos, porque parece que se va retrasando, pero me parece que esto podrá solventarse y que iremos, pues tenemos vocación europeísta—. Nosotros queremos ir al Mercado Común y la ganadería española necesita del Mercado Común; los 300 millones de habitantes del Mercado Común serían los grandes consumidores de esta despensa que podría ser la ganadería española. Pero para poder canalizar esto hay que tener una mentalidad exportadora de productos cárnicos, de carne, de transformados, y esto ahora no existe.

Yo creo que el Gobierno —y aquí sí que al señor Ministro le debo hacer este emplazamiento— debería manifestar las intenciones que tiene no en estos momentos de cara a fomentar la exportación de los productos cárnicos, porque no me consta que en ningún tratado comercial, en absoluto —o lo ignoro, al menos—, esté, en las mutuas relaciones de compra y de venta, la posibilidad de exportación de productos cárnicos, y somos competitivos en el exterior; y ello es así porque en los pequeños pinitos que se han hecho de exportación de transformados a Alemania, Suecia, Inglaterra, etc., en calidad, en presentación, en precios, somos competitivos, pero no tenemos en absoluto ninguna ayuda para poder canalizar esta potencia que sería la ganadería española hacia Europa.

Hace poquísimos meses se estaba exportando cantidad importante de grasas fundidas hacia Europa. En estos momentos se está im-

portando. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la Administración no ha sido ágil? ¿Por qué no ha consultado a los sectores para decir: «Compremos estas grasas, con las primas que sean, con el dinero que se gasta el FORPPA en esta protección»? ¿Por qué no podrían comprarse y almacenarse en estos momentos? ¿Por qué no está canalizado el consumo y así fomentar en un apartado más esta potenciación de la ganadería?

Yo creo, señor Ministro, que si esta Cámara, que a veces los Senadores la catalogamos de devaluada, de segunda categoría, la utilizáramos todos y cada uno de nosotros en los temas que conocemos y viniéramos aquí e hiciéramos sesiones monográficas de estos conceptos, sí sacaríamos rentabilidad de esta Cámara, y no perder el tiempo, como a veces hacemos, para rectificar proyectos de ley que sabemos que van al Congreso y quedarán tal como han llegado, y aquí hemos perdido horas y horas para no enmendar nada.

Nos agradecería, pues, que a partir de estos momentos estas sesiones se repitieran. Nosotros lo solicitaremos. Nos gustaría que usted también lo solicitara, y que de aquí saliera esta potenciación de la ganadería española, que es uno de los grandes recursos que tenemos de ir hacia Europa, por esta vocación europeísta que tenemos todos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalunya, Democracia i Socialisme, tiene la palabra el señor Ball i Armengol.

El señor BALL I ARMENGOL: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, nuestro Grupo Parlamentario no podía estar ausente de la interpelación de nuestro compañero Honorio Díaz; nuestras zonas geográficas, aunque muy distanciadas, geológicamente nos unen por esta gran cordillera pirenaica. Climatológicamente sí que se diferencian—en pluviometría, en nieve, en temperatura—, pero nos unen unas características agropecuarias comunes; esto quiere decir unos problemas comunes; tenemos unas razas vacunas autóctonas, que la naturaleza, todo el sistema del ecosistema, ha seleccionado a través de los siglos, razas mixtas de carne, leche y trabajo, razas algunas de ellas a punto de desaparecer, por llevar el Gobierno, y Go-

biernos que le han precedido, una política errónea en el mejoramiento de estas razas autóctonas.

Para evitar las exportaciones tenemos que proteger, y proteger quiere decir seleccionar estas razas pirenaicas autóctonas, llevar un control genealógico, bancos de semen, fecundación artificial, etc.; en una palabra una selección.

España es rica, señores, más que ninguna nación, en esta variedad de razas, como de pueblos que forman la península; razas que han servido de mejora a otras, como el caballo andaluz, de origen árabe, y de las que los ingleses, por selección, consiguieron el famoso caballo de carreras. Nos extenderíamos en otros campos, como las cánidos, etc.

Exportábamos el garañón de Vic, hoy a punto de desaparecer; la raza merina, la churra aragonesa, etc.

Me gustaría saber del Gobierno qué centros tiene de investigación de estas razas, qué centros de selección y control lleva. Esta política anárquica ganadera provoca una pérdida de productividad, agravándose por las importaciones cárnicas, en las que el primer perjudicado es el ganadero, pues provoca una baja en sus ventas, en sus precios, y que tampoco beneficia al ama de casa en sus compras. Entonces, ¿a quién beneficia?

Nuestra política de importación cárnica está llena de errores. Con estas importaciones no estimulamos las inversiones ganaderas, sino todo lo contrario las frenamos, no invirtiendo en la ganadería.

Hace unos años exportábamos avicultura a los países árabes; teniendo unos mercados conquistados en esos países, se cortaron las exportaciones, se perdieron estos mercados a favor de otros países y se provocaron unos «stocks» de excedentes, baja de precios y granjas que tuvieron que cerrar.

Todo ello motiva que necesitamos una política ganadera coherente, una política que no consulte desde abajo.

En la otra legislatura se formó una Comisión Especial sobre Comercialización de Productos Agrarios, de la que yo formaba parte—por lo visto, poco éxito ha tenido—, en la que se marcaban unas pautas que no se han tenido en cuenta.

Para terminar, me permitiría sugerir al Go-

bierno no sólo un cambio de orientación en el sentido expuesto, sino, a la vez, una política de divulgación acerca de la conveniencia de prescindir de innecesarias importaciones a nivel privado, por tentadoras que a corto plazo parezcan, con el fin de promocionar nuestras condiciones autóctonas nacidas de la propia geografía, que permitan alcanzar una cierta suficiencia en materia tan importante como la que ahora ocupa la atención de esta Cámara, y que con tanta oportunidad ha traído el compañero Díaz.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista Andaluz, tiene la palabra el señor García Correa.

El señor GARCIA CORREA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, muy brevemente, porque tenemos un orden del día muy amplio y a ver si no terminamos muy tarde.

Intervengo, en nombre del Grupo Socialista Andaluz del PSOE, en apoyo de la interpelación formulada por mi compañero Honorio Díaz. El Grupo de Senadores Andaluces del PSOE no podía dejar pasar esta ocasión de intervenir en un tema tan importante para Andalucía como es el tema ganadero.

El campo andaluz está ardiendo, Señorías, y no sólo arden los trigales, sino también la sangre de los medianos y pequeños campesinos y ganaderos que ven cómo el Gobierno no tiene una política agraria, no tiene una política ganadera. Y si el problema ganadero en Asturias, Galicia o Cantabria es grave, mucho más lo es en Andalucía, al haber menos pastos debido a las escasas lluvias y tener los ganaderos que mantener la mayor parte del año a sus ganados a base de piensos.

Puedo poner un ejemplo a Sus Señorías. Por residir en ese bendito lugar que es la Sierra de Aracena, la tierra de los buenos jamones de Jabugo, y su comarca, puedo decirles que este año se ha pagado la arroba de cerdo entre 100 y 200 pesetas menos que hace dos años, mientras que los piensos se han incrementado en el mismo periodo en más del 30 por ciento.

Y si hablamos del precio de los productos de estos cerdos, pueden verlo Sus Señorías

acercándose a una cafetería y pidiendo una ración de jamón de Jabugo, y estoy seguro de que cuando le pasen la factura se les indigestará el jamón. (Risas.)

Pero esto no sólo pasa con el ganado de cerda, sino con el vacuno, ovino, cabrío, etc., como muy bien ha dicho mi compañero Honorio.

Y mientras esto ocurre, el Gobierno sigue importando carne sin orden ni concierto y sin preocuparse del gravísimo problema que tienen planteado los medianos y pequeños ganaderos españoles. Y el Gobierno y el Partido del Gobierno tienen medios técnicos y humanos para dar solución a ese problema.

Puedo decir a Sus Señorías que en mi provincia de Huelva tenemos un Senador que es Presidente de las Cámaras Agraria, Presidente de la Caja Rural, Vocal de varias empresas productoras de piensos, etc. No voy a decir a Sus Señorías quién es este Senador, pero lo que sí les aseguro es que no es socialista, y conste que le tengo en gran estima y que lo que necesita es ayuda del Gobierno para poder llevar a feliz puerto estos cargos que tiene, claro.

Para terminar diré que esta desastrosa política ganadera incide gravemente en el paro en Andalucía y que muchos pequeños ganaderos, que han vivido siempre de su ganado, han tenido que abandonarlos y pasar a engrosar la gran lista de parados que tenemos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista del Senado, tiene la palabra el Senador señor Castro Uría.

El señor CASTRO URÍA: Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, con brevedad, por lo dilatado de la interpelación del Senador Honorio Díaz, del Grupo Socialista del Senado, y dado que, además, creo que el señor Ministro tendrá por evidente la manifiesta discrepancia puntual que existe entre los señores Senadores de esta Cámara que me han precedido en el uso de la palabra. Evidentemente, se ha insistido en el problema de las carnes. El señor Ministro ha querido eludir el problema o ha dicho que no se refería el Senador Honorio Díaz al aspecto o al sector de ganado porcino, pero, como sabe muy bien el

señor Ministro, el problema afecta a los sectores bovino, caprino, porcino y ovino.

Digo que el problema reside en una serie de circunstancias que van desde las importaciones hasta la inmovilización de los productos lácteos, importaciones que son de carnes y de cereales.

Si efectivamente ha habido un desliz, yo quisiera decirle al señor Ministro, por si no coinciden sus datos o notas o las del Ministerio con las mías, que la importación de animales y derivados en el pasado año, según los datos económicos existentes, alcanzó los 27 mil millones de pesetas la referente a cereales y derivados.

Los datos de precios han quedado, evidentemente, de manifiesto de un extremo a otro, y yo podría añadir —aunque los conoce el señor Ministro— que en las últimas ferias celebradas en Santiago de Compostela —¡ironías del destino!— ha mejorado el mercado de ganado, la exportación y las compras destinadas a Portugal, con motivo de la proximidad —según técnicos— de la época turística en aquel país. Pero en Torrelavega, Avila, Alava y León, mi provincia, no habrá manera posible de dar interpretación a las manifestaciones del señor Ministro en cuanto a que continúen en su actividad los ganaderos.

Yo creo que lo que falta es una información plena —y perdone el señor Ministro que lo diga, con todos mis respetos, que a los ganaderos y agricultores no ha de continuar indicándoles el camino a seguir—, que considero imprescindible, porque este sector es el más deteriorado culturalmente, en el «hábitat» y en casi todos los sentidos, y lo conoce muy bien el señor Ministro. Yo quisiera insistir en la difusión de esa información; que existe un informe del COPA, de fecha 7 de enero de 1980, hecho en Bruselas, donde se manifiestan los problemas que presenta la agricultura y la ganadería en España; donde se hace referencia a esa baja producción de los pastos; donde se dice que, en el año 1965, un plan del Banco Mundial preveía el autoabastecimiento de carnes para los españoles. Estamos muy distantes de esta situación y dice el señor Ministro que eso es el Decreto que regula las campañas de importaciones.

Creo —como ha dicho el señor Casademont— que es imprescindible la coordinación

entre Ministerio de Comercio-Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, donde también, desafortunadamente, ha publicado la Dirección General de la Salud, con fecha 30 de octubre de 1979, una Orden por la que prohíbe la venta de carnes procedentes de matanzas a nivel familiar. Pero, señor Ministro, es que las explotaciones en todas estas regiones que he citado, principalmente en la montaña de León, en Galicia, en la montaña de Asturias y todo lo que es la cornisa Cantábrica, que no solamente comprende Asturias, son explotaciones familiares que se dedican tanto a la agricultura como a la ganadería y tienen un entorno y unas circunstancias específicas donde la no compra, la no adquisición de la leche que producen, origina un gran deterioro. Desde luego, si el Decreto que regula las campañas no ha procedido a subsanar o a corregir los motivos para los cuales fue dictaminado, debe de procederse a modificarlo, y será imprescindible esa coordinación entre los Ministerios para evitar que el deterioro siga «in crescendo». Sería como ha dicho el Senador Casademont —muy conveniente—, porque este es un debate que creo, por el colectivo que supone afectado por estas medidas, digno de mayor atención y constancia, por lo menos con una periodicidad que quede manifiestamente programada, que exista esa información y que, en definitiva, se cumplan los buenos deseos del señor Ministro, pero creemos que es necesario desarrollar una política de sectores, una política de planteamientos, una política de programa y de productividades y capacidad de producción, con vista a la capacidad productiva desde los pastos hasta las capacidades de producción de carne y de leche que pudiéramos adquirir.

No quiero cansarles más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El Senador López González, por el Grupo Parlamentario de UCD, tiene la palabra.

El señor LOPEZ GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, señor Ministro, después de la intervención del Senador, entrañable y buen amigo Honorio Díaz defendiendo la interpelación presentada en su día sobre la ganadería del país, y especialmente sobre los problemas en Asturias, y del

señor Ministro manejando ya datos y cifras abundantes, yo me voy a limitar a exponer el pensamiento de mi Grupo en este tema.

Es muy oportuno, señor Díaz, y tanto mi Grupo Parlamentario, UCD, como ya personalmente se la agradecemos, porque nos da ocasión de hablar aquí de los problemas del campo, y ¡ya era hora da hablar del campo!, hablar, proponer y dar ideas para apoyar este sector tan olvidado a través de los siglos de manera incomprensible, cuando es pieza clave en la economía de España; no podríamos admitir ni contemplar impasibles por más tiempo el desaprovechamiento permanente de la riqueza potencial que se encierra en nuestras tierras. Esta es, sin duda, la idea del Gobierno de UCD y, desde luego, del Senador que les habla. Gracias, señor Díaz, porque nos da la oportunidad de manifestar nuestra vocación por el campo, por el campesino y sus problemas, no por puro romanticismo, sino porque es de justicia y es, sobre todo, un factor importantísimo en el futuro desarrollo económico de España, que yo supongo, espero y pido tengan en cuenta nuestros equipos de economistas en todo el proyecto de programa.

¿Qué recursos tenemos en el campo?, ¿cómo los aprovechamos?, ¿qué productos nos da?, ¿qué nos debería dar con una estructura y aprovechamiento óptimos?, ¿qué diferencia hay de cifras? —y aquí nos asombraríamos— y, en consecuencia, ¿qué debemos aportar al sector para hacer buenos los mismos?

Es cierto, como el interpelante denuncia, que está bajando el precio de la carne, no para el consumidor, sino tan sólo para el ganadero, en perjuicio de él, y muy especialmente del más modesto ganadero de nuestra región, y más que nada en sus zonas aún deprimidas; pero la razón más importante —y el señor Ministro ya la apuntó y yo la encuentro evidente— está en la baja de consumo. Las circunstancias económicas de índole general en el consumidor hacen que los españoles, sin duda alguna, coman menos carne, y ésta es una simple consideración de pura «cesta de la compra». Yo les diría, por ejemplo —por conocer mucho el sector—, que se compren menos camisas o menos prendas de vestir, poniendo con ello en situación

apurada y difícil a toda la industria textil de la confección, y lo digo porque conozco realmente el sector; y es que, señores, quizá tendríamos que pensar en consumir algo menos de gasolina para gastar un poco más en estas «minucias».

Indudablemente, si a una disminución en el consumo, sea en leche o en carne, se une el aumento de las importaciones, se agrava, claro está, todo el conjunto. No se pensó, quizá, al programar dichas importaciones en una disminución tan acusada de la demanda interior, sino en todo lo contrario, y se trataba así de mantener o disminuir los precios al consumidor —que falta le hace también—, al menos para determinadas clases de carne. ¿Qué se le hubiese dicho al Gobierno si la demanda hubiese sido normal y los precios se disparasen? Es mi opinión, el señor Ministro nos ha dado una explicación de cómo funciona la regulación en cuanto a precios de garantía y a dónde llegan sus límites. Sin embargo, le quiero apuntar que, sobre todo en el programa de comercio exterior, tenemos que actuar sin reparos cuando los condicionantes cambian, cortando en un momento dada toda entrada, anulándola, aplazándola o buscando las mil formas de retraso que todos los países emplean. A nosotros nos lo hacen sin contemplaciones Estados Unidos, con el calzado; Inglaterra, tan recientemente, con las patatas; los franceses, volcando nuestro camiones, etc. Espero me disculpe, señor Ministro, y me disculpen Sus Señorías, por la simpleza de este argumento; ya se me alcanza que la toma en consideración de cualquier medida de este tipo ha de ser de tremenda complejidad y graves, muy graves las repercusiones que puede tener, pero el sostenimiento y la vida de todo este importantísimo sector del campo en Asturias, y en las demás regiones de España, también lo es y justifican sobradamente cualquier acción en su defensa, por engorrosa que resulte.

Estamos completamente de acuerdo en que las estructuras de nuestra agricultura y ganadería en Asturias son difíciles y primarias; se encuentran realmente obsoletas, y mucho más en las zonas deprimidas y de montaña, pero también es nuestra región la más urgente, si cabe, de diversificar y modernizar su monocultivo, cara al ingreso de la CEE, por

las posibilidades, señor Ministro —que recojo de las frases del señor Díaz—, de competitividad de cara a la CEE. Podemos ser, como el señor Casademont decía también, una gran parte de la despensa de Europa en carne.

Pero todo esto no debe llevarnos, como el señor interpelante hace, a mezclar problemas coyunturales con argumentos de fondo, en los que, naturalmente, todos estamos al lado del agricultor. Las respuestas del Gobierno han de ser de un alcance integral. Aunque en esta réplica yo pudiera enumerar las actuaciones concretas en Asturias, no voy a ser prolijo ni cansino con la Cámara y me detengo especialmente en aquellas que contemplan esta filosofía de acción integral para beneficiar el atraso y subdesarrollo de zonas ancestralmente olvidadas, como pueden ser las declaraciones de «zonas de acción especial» sobre doce importantes municipios en el sudoeste de Asturias, y que ahora pretendemos lograr para la parte oriental, la conservación y extensión de los beneficios del IRYDA en importantes comarcas y los planes conjuntos que para toda la cornisa contábrica prepara el Ministerio de Agricultura.

Existe, a punto de entrada, como todos sabemos, en el Parlamento, una ley de ganadería de montaña, y, como medida de apoyo a la campaña lechera, un plan de potenciación de las explotaciones agrarias familiares. Pero el Ministerio tiene que actuar dentro de esa visión integral del problema, y naturalmente sabe que no es posible una mejora en las rentas por la vía únicamente del incremento de precios, porque esto —y también lo sabe muy bien el señor Díaz— sólo beneficiaría a los grandes ganaderos y separaría fuertemente nuestro nivel de precios con respecto a los del Mercado Común. Una cosa es hacer demagogia de ocasión —y estoy seguro de que no es ésto la intención ni el caso— y otra muy distinta reflexionarse con alcance nuestra problemática de hoy, de mañana y de pasado.

Nuestra comprensión del problema quiere ser integral, porque no queremos desnaturalizar artificialmente este deprimido, pero potencialmente valiosísimo sector, y lo que tenemos que hacer es reconstruirlo con comunicaciones, servicios, instalaciones, «hábitat» y ayudas a su futuro. Vamos a apoyar y me-

jorar las estructuras y medios de producción, pero con la única intención de brindar toda la responsabilidad y todo el protagonismo, como aquí se dijo, al hombre del campo, y que esta forma autónoma y responsable mejore su nivel de rentas.

Sabemos de la dificultad de la coyuntura, pero no podemos ofrecer soluciones de parcheo engañoso, con las que contentaríamos hoy, pero defraudaríamos mañana y siempre. Yo podría poner un ejemplo al interpelante sobre un tan controvertido tema como es el del precio de la leche. La productividad de las unidades familiares en España es muy baja y de una dimensión o medida inadecuada. Por eso precisamente es baja: por sus medidas inadecuadas. Pero remediar esta situación con una mejora de rentas por el incremento de precios nos llevaría, indefectiblemente, a los beneficios de grandes ganaderos, a la creación de grandes vaquerías en las periferias de las grandes ciudades, el abandono y desaparición de la ganadería natural, quedándonos, además, la seria sospecha de que, batidos en precios y calidades por los países productores de la CEE, no habríamos hecho otra cosa que firmar el acta de defunción de nuestra agricultura y ganadería. Tenemos que ser así de absolutamente claros y mirar hacia delante. Nuestra consideración del problema ha de ser integralmente comprometida, y no venimos a esta Cámara a rivalizar por un aquel de quién está más cerca del hombre del campo, sino a demostrar con soluciones de alcance cómo se lucha en serio por su real supervivencia.

Una medida positiva en tal sentido que me atrevo a sugerir al señor Ministro y que creo muy importante, porque es de tipo psicológico, sería, por ejemplo, la de proporcionar crédito barato al agricultor y ganadero, subvencionando la diferencia de unos intereses que no deben ir más allá del 4 o del 5 por ciento, por dos razones fundamentales: una, que la mentalidad de la familia campesina no admite, porque no lo asimila como razonable, un costo tan alto del dinero; y otra, que la rentabilidad en el campo, si la hay, siempre fue bajísima y no permite, por tanto, intereses altos. Es necesario proporcionar dinero asequible a las posibilidades monetarias y mentales del medio.

Unión de Centro Democrático no sólo apoyará al Gobierno, sino que, por mi voz, le pide en este momento y desde esta Cámara que mantenga y dé impulso a toda la política agraria y ganadera que se propuso y que, además, no descansa en la búsqueda de nuevas vías que resuelvan tantos problemas de la ganadería de Asturias, la cornisa cantábrica y el resto del país, y se pueda acelerar el desarrollo general del campo, hacia el que nos debemos volver, y no porque queramos el campo como lo queremos, ni porque en su día nos haya votado masivamente o nos vaya a votar mañana otra vez —como estoy seguro que su peculiar y fina intuición de siempre le aconsejará—, sino porque el campo es de España, sea quien sea el que la gobierne, y lo necesita España como factor principalísimo de su economía, y por eso España y quien la gobierne han de pensar en el campo, y por eso UCD, que hoy la gobierna, piensa en el campo, pero yo le pido, señor Ministro, que se piense aún más en él.

El señor GARCIA PALACIOS: Pido la palabra por alusiones.

El señor PRESIDENTE: Tiene dos minutos para ello.

El señor GARCIA PALACIOS: Quería agradecer a mi paisano el señor García Correa las alusiones que me ha hecho y aclararle que indiscutiblemente soy Presidente de la Caja Rural y de la Cámara Agraria de Huelva, pero no tengo ningún interés privado en ningún tipo de organización y menos de piensos. Además, que soy —y muy reconocido por cierto— Presidente de ambas entidades por el voto de socialistas y comunistas, entre otras fuerzas políticas.

El señor PRESIDENTE: El señor Senador Díaz Díaz, para rectificación, tiene la palabra.

El señor DIAZ DIAZ: Señor Presidente, Señorías, señor Ministro, con todos los respetos y todas las consideraciones que el señor Ministro me pueda merecer, tengo que decirle lo siguiente: si hay menos consumo, huelgan las importaciones o, por lo menos, deben ser controladas.

El señor Ministro tampoco me contestó a las siguientes preguntas: ¿Qué planes ganaderos tiene el Gobierno para la cornisa cantábrica? ¿Existe algún proyecto de inversión de fondos públicos en la cooperativización de la comercialización de la carne? ¿Por qué los sindicatos agrarios no tienen participación en la adopción de decisiones sobre si se realizan o no importaciones? Hay más, ¿cómo controla el Ministerio de Comercio para que las importaciones realizadas en tráfico de perfeccionamiento no se desvíen al consumo directo?

Estas, señor Ministro, creo que son cosas muy importantes; muy importantes porque la carne que se compra, que viene y que se importa en tráfico de perfeccionamiento no debe consumirse aquí, sino que se debe perfeccionar y luego volver a los sitios de origen.

Me ha hablado, señor Ministro, y me ha prometido muchas cosas —o ha prometido a esta Cámara—, pero de promesas ya está bien, lo que necesitamos los ganaderos españoles son realidades y esperanzas, esperanzas que todavía no vemos por ninguna parte. No vemos por ninguna parte, porque cada día que pasa, a pesar de todo lo que ha dicho el señor Ministro, el problema de la carne se está agudizando cada día más. Esto creo que debe tenerlo muy en cuenta el señor Ministro para que la ruina no siga perpetrada en los ganaderos españoles, en todos los ganaderos y provincias españolas, como son Alava, Albacete, Alicante, Almería, Avila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cáceres, Castellón de la Plana, Ciudad Real, Córdoba, La Coruña, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lérida, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santander, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza, que son la totalidad de las provincias españolas. A estas provincias, a estos ganaderos se les ha llevado a la ruina por las importaciones.

Yo le pediría al señor Ministro y al Gobierno de UCD que pusiera la mano en el corazón, y no sólo usted, sino los demás Ministros que están implicados en las importaciones, y piensen en la máxima del mártir del Gólgota cuando dijo: «No quieras para

los demás lo que no quieras para ti». Digo esto, señor Ministro, porque supongo que ni usted ni los suyos querrán para ustedes una vida tan llena de sacrificio, tan llena de calamidades, tan llena de trabajos, tan llena de problemas como tiene el ganadero español. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA (Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, voy a intentar contestar siquiera sea sintéticamente a todas las intervenciones que aquí se han producido, y lo haré lo más brevemente posible en atención a los debates que Sus Señorías deben tener en momentos sucesivos.

Vaya por delante el agradecimiento al Senador señor Díaz por haber planteado la interpelación, y se lo agradezco de verdad, con toda sinceridad, porque hacía ya tiempo que no se producía ninguna interpelación hacia este Ministro en esta Cámara, y siempre es un motivo de satisfacción el tener alguna interpelación que me permita volver aquí y mantener un diálogo abierto y franco, como siempre en cualquier tipo de tema, en este caso concreto con el tema de la carne.

Al señor Casademont quisiera precisarle algunas cuestiones, aún coincidiendo con él en algunos de sus planteamientos. Le agradezco mucho las palabras que ha tenido en relación con mi persona, creo que absolutamente inmerecidas, y le agradezco también el que haya planteado aquí un tema al que prácticamente no se le suele hacer ninguna alusión y que, desde mi perspectiva, es de una importancia total en la regulación del mercado agrario, y en particular del mercado de la carne; me refiero, concretamente, al tema del comercio del Estado.

Siempre que se habla de este tema desde la Administración hay una reacción, yo diría que casi total, en contra de la supresión del régimen de Comercio de Estado, y a favor, naturalmente, de que se mantenga este sistema y de que no se vaya a un mecanismo de privatización de las importaciones.

Yo creo haber dicho muchas veces en esta

Cámara y fuera de ella, que esa dualidad, a la que aludía Su Señoría —y que ha sido después mencionada por algún otro Senador, entre otros también por el Senador señor Díaz—, que esa dualidad de criterios que muchas veces se plantea desde la calle y frente a nosotros, frente al Gobierno, como criterios antitéticos entre el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura no existe. Lo que ocurre es que la regulación del comercio de Estado es una regulación mucho más grosera que la regulación que se puede obtener con un sistema privatizado de importaciones.

Ocurre, sin embargo, que cada vez que el Gobierno habla de privatizar las importaciones y, por tanto, de abrir un mecanismo mucho más ágil, nos encontramos siempre, precisamente, con una reacción de agricultores y ganaderos que nos plantean sistemáticamente que esto no debe hacerse, y nos plantean sistemáticamente que el comercio de Estado es lo que mejor les protege frente a las importaciones. Y aquí, sin embargo, se ha puesto de manifiesto —y me parece que lo han puesto de manifiesto todos los Senadores que han intervenido—, que es, precisamente, el sistema de comercio de Estado el que menos les protege.

En contrapartida, yo tendría que decir que es el sistema de privatización de importaciones el que más puede proteger a los agricultores y ganaderos. ¿Por qué? Porque el comercio de Estado funciona sobre una apreciación del funcionamiento de los mercados futuros llevado a cabo por la propia Administración; y es mucho mejor que esa apreciación la realice el sector privado; y es mucho mejor que esa apreciación, una vez que se ha deducido de ella una consecuencia, sea el propio sector privado el que intente sacar partido de esa situación de mercado. En el Plan Económico del Gobierno (y tengo que decirle al señor Senador que no es un manual de buenas intenciones en absoluto, aunque también sea un manual de directrices de buenas intenciones; es todo un plan económico), y en el debate de política agraria del pasado 6 de junio, afirmamos que íbamos a llevar a cabo esa privatización de importaciones.

Ocurre, sin embargo, que no encontramos,

esa es la verdad, excesivo apoyo en aquéllos en que deberíamos encontrarlo, que son los agricultores y ganaderos, que son los que tendrían que encontrar en la desaparición del comercio de Estado la mejor garantía de que esa situación, a la que Su Señoría ha aludido hace un momento, no se va a producir en el futuro.

Yo no creo que falte agilidad en la aplicación de los decretos de regulación de campaña. Lo que sí afirmo taxativamente es que es más ágil el mecanismo de privatización de la importación que el de comercio de Estado, y, en su consecuencia, el mecanismo de comercio de Estado introduce permanentemente un retraso con respecto a la toma de decisiones y, una vez tomadas éstas, con respecto a la presente física de la carne en España, y eso es lo que introduce a veces factores de perturbación —caso que conoce muy bien Su Señoría—; de ahí la necesidad de llevar adelante la privatización del sistema de importaciones.

Si tuviera realmente que hacer una conclusión amplia, genérica de este debate, yo diría que el debate habría sido de extraordinaria utilidad para el futuro de nuestra ganadería.

Ha aludido Su Señoría, al tema del porcino. Efectivamente, el porcino cayó de precio a lo largo del año en la forma y manera en que Su Señoría ha aludido. Empezó a caer en la diecisieteava semana del año, y terminó de caer en la veintiuna, y a partir de este momento se ha vuelto a recuperar. La cotización del porcino tuvo ahí un problema de difícil solución, pero que después ha mejorado sustancialmente merced, entre otras cosas, a la intervención del FORPPA.

Yo comparto la preocupación de Su Señoría con respecto a la peste porcina africana y habrá podido observar que hace muy escasos días, anteayer sin ir más lejos, yo estaba en Lisboa dialogando con el Ministro de Agricultura portugués; porque Su Señoría pregunta qué pasa con los diez millones de unidades-cuenta que nos da la Comunidad Económica Europea para esta finalidad. Yo se lo voy a contestar. De nada nos valdría el que nosotros, con esos diez millones de unidades-cuenta, consiguiéramos que nuestro territorio nacional quedara exento de peste porcina si el territorio vecino, que también

la tiene, con una frontera extraordinariamente abierta entre ambos, no consiguiera y no hiciera desaparecer la peste porcina africana de su territorio. Y de ahí las conversaciones de estos días para lograr que nuestros técnicos elaboren un plan conjunto, un plan que nos permita ir erradicando la peste porcina y declarando zonas exentas en cada uno de los dos territorios para terminar con ella, si esto es posible.

El señor Ball Armengol me ha hablado de una serie de temas, entre otros, de lo relativo a las razas autóctonas. Pues bien, las razas autóctonas se están protegiendo. Yo tengo que decir aquí que a lo largo del último año se establecieron una serie de disposiciones que tienden a permitir que las razas autóctonas prosperen; que se establezcan los libros genealógicos correspondientes, y que, simultáneamente con ello, vayamos avanzando en lo que hemos denominado «ganadería ligada a la tierra»; es decir, ganaderías que tengan mayor base territorial y que dependan menos de las importaciones. Sobre todo eso se ha avanzado. Conoce Su Señoría un decreto de febrero del pasado año y no voy a insistir en ello; pero sí tengo que decir que no estoy en absoluto conforme con la afirmación que ha hecho de política anárquica ganadera. No ha habido una política anárquica ganadera; hay una política ganadera y hay una política de importaciones que está en función estrictamente de los precios de intervención superior.

Con respecto al documento al que ha aludido, de la anterior legislatura, relativo a las pautas de comercialización, yo tengo que decir que lo conozco, que algunos de los puntos se están aplicando y que también agradezco las sugerencias que me ha hecho en la última parte de su intervención.

El señor García Correa, del Grupo Socialista Andaluz, ha afirmado que no hay política agraria en Andalucía. Yo lamento que lo haya hecho en el contexto de un debate sobre política ganadera; y lo lamento porque tendría que referirme a una serie de productos que no son ganaderos, pero que, en una buena medida, condicionan más el futuro agrario de Andalucía, porque Andalucía es básicamente agrícola y no básicamente ganadera. Por ser básicamente agrícola quizá Su

Señoría no se ha referido al algodón, a la remolacha, al aceite de oliva, al corcho o a los cereales, y yo creo que debería haberse referido. ¿Por qué debería haberse referido? Porque sabe perfectamente Su Señoría que se ha hecho una política de producción de remolacha que este año va a producir grandes efectos y, como consecuencia de ello, probablemente se obtendrán del orden de unas 2.400.000 toneladas frente a un millón y medio del año pasado, y a buen precio, como Su Señoría conoce. Y sabe que se ha hecho una política de expansión del algodón, muy importante, que venía descendiendo en toda la superficie del territorio nacional, fundamentalmente en Andalucía y Extremadura, y sabe perfectamente que este año no sólo no está descendiendo, sino que aumenta, y si no aumenta más es porque ha habido problemas de semilla, señal de que el precio que se ha fijado no es tan malo; y sabe Su Señoría que el Ministerio está subvencionando hasta tal extremo las superficies de algodón que en este momento la subvención representará, durante el presente año, aproximadamente del orden de mil pesetas por jornal empleado en el algodón. Me parece que es un dato muy significativo en este momento en que se plantean temas relativos también, como Su Señoría ha mencionado, al paro.

Podría hablarle también del aceite de oliva, en donde se ha producido un incremento notorio del precio, el 17 por ciento en un año, cifra no conocida en la historia de los aumentos, en términos relativos, naturalmente por la inflación, a lo largo de los últimos años, y también se están produciendo decisiones importantes en esta materia, como, por ejemplo, la que se verá el domingo próximo, en el que yo tendré la satisfacción de presentar en Jaén la campaña institucional de publicidad del aceite de oliva que la Administración piensa llevar a cabo.

No he hablado tampoco del corcho, donde se acaban de aprobar 200 millones de pesetas en créditos, que son muy importantes para la saca de este producto; y tampoco he hablado de los cereales, que constituyen la base de la agricultura en Andalucía. Quiero decir con esto que si se quiere examinar a fondo el tema de la agricultura en Andalucía, no

tengo ningún inconveniente en hacerlo, al contrario, me encantaría entrar en ello con toda la profundidad que se desee. Ahora bien, si se hace aquí esa afirmación, hágase la afirmación completa, porque completa es como debe examinarse.

Dice que estamos importando carne sin orden ni concierto. No. Creo que estamos importando carne con orden y buena música. Y digo con buena música porque la carne que se ha importado, señor Díaz, cuando estaba afectando a las producciones ganaderas, se ha almacenado y no se ha permitido que saliera un solo kilo de carne procedente de tales importaciones.

El señor Castro Uría afirma que este tema afecta a los tres sectores: vacuno, porcino y ovino. Sí, es verdad, no niego que es así. Afecta, entre otras razones, porque lo que se ha dicho en relación con el consumo de carne vacuna puede desplazarse en relación con los otros sectores. Es decir, cuando se produce una reacción de ese tipo, naturalmente no deja intactos los consumos de carne de porcino y de ovino; produce un efecto de traslación, sobre todo los sectores, porque los tres están perfectamente imbricados, como he indicado anteriormente.

Dice que falta información plena en relación con algunos puntos. Le puedo asegurar a Su Señoría que si es verdad que falta esa información y Su Señoría detecta esa falta, por mi parte estoy dispuesto a brindársela, porque nada me agrada más que los ganaderos y los agricultores españoles y, naturalmente, todos los Senadores y Diputados, representación genuina del pueblo español, mantengan el mayor volumen de información sobre todos los temas agrarios. Esto es bueno, tanto cuando esa información puede demostrar errores nuestros como cuando puede confirmar aciertos nuestros. No pretendo ocultar nada, sino todo lo contrario; que posean toda la información, y si el análisis de la misma conduce a la consecuencia de que nos hemos equivocado, rectificaremos el rumbo y, por consiguiente, yo, en la medida en que hayamos podido cometer errores en suministrar información, les doy la seguridad a Sus Señorías de que procuraré rectificar.

Mi compañero de partido señor López González dice que la agricultura ha sido olvidada

a través de los siglos. Es verdad, pero creo que coincidirá conmigo en que yo puedo afirmar aquí que no ha sido olvidada en los últimos dos años. No ha sido olvidada en los últimos dos años y buena prueba de ello son, por ejemplo, los presupuestos. Yo emplazo a Sus Señorías a que hagan un análisis detenido del presupuesto del Ministerio de Agricultura y verán las variaciones sustanciales que se han introducido a lo largo de los últimos dos años y como tanto las dotaciones para inversiones, como las dotaciones para subvenciones, como asimismo las dotaciones que no están en el Ministerio de Agricultura, pero que se corresponden con las subvenciones internas del régimen de la Seguridad Social Agraria constatan cuánto ha sido el esfuerzo que a lo largo de los últimos dos años y medio este Gobierno, un Gobierno de UCD, ha llevado a cabo en el campo español.

Puedo asegurarle que continuará la actuación del IRYDA en Asturias, que se ampliarán, como resultado de esta petición que aquí se acaba de formular, las actuaciones en Asturias del IRYDA, y le agradezco vivamente sus sugerencias, todas ellas interesantes y algunas de las cuales llevaremos a la práctica, al mismo tiempo que deseo agradecer en este momento el apoyo que ha expresado Su Señoría, el apoyo de mi Grupo, que sé que siempre cuento con él.

Finalmente debo contestar al interpelante, señor Díaz. Dice que hay menos consumo y que huelgan las importaciones. Pues bien, Señorías, precisamente eso es lo que he afirmado al principio, que hay menos consumo y que como huelgan las importaciones, no se están haciendo éstas. Y no sólo eso, sino que como huelgan las importaciones, no se está distribuyendo carne congelada. Y eso lo sabe Su Señoría y estamos actuando, por lo tanto, dentro del límite del Decreto de Regulación de Campaña.

Dice que no le he expuesto los planes ganaderos; se los puedo exponer, pero dichos planes están publicados en el «Boletín Oficial del Estado». Fundamentalmente, la cornisa cantábrica está afectada por el Real Decreto de ganadería ligada a la tierra, publicado en febrero de 1979.

Fondos públicos. Claro que van fondos públicos a actuaciones de cooperativas, y Su Se-

ñoría lo sabe. En Asturias se han dado a través del IRYDA, por diversos cauces. Fundamentalmente nosotros los damos en forma de créditos y subvenciones a las cooperativas, cuando, naturalmente, éstas llevan a cabo inversiones productivas.

Me habla de la participación de los agricultores. Su Señoría sabe perfectamente que en las decisiones relativas a precios hay consultas con las Organizaciones Agrarias y que fruto de esas consultas son las propuestas que se formulan al Gobierno. Lo que no hay, evidentemente, es una participación de las Organizaciones en las decisiones de importar, pero esto no lo hay aquí ni en ningún país del mundo. Esa es la razón por la cual es tan importante pasar al régimen de privatización de importaciones.

Dice que el problema de la carne se está agudizando; yo creo que no, yo creo que probablemente estamos tocando fondo. Creo, y ojalá pueda acertar y ojalá se equivoque Su Señoría, pero, naturalmente, cualquiera que sea la situación, lo que sí puede tener es el convencimiento de que en el marco de los decretos de regulación de campaña están las soluciones a este problema. Ahora se está empezando a discutir —y Su Señoría lo sabe— el decreto correspondiente a la campaña 1979-1980. Le felicito, en cualquier caso, por el ejercicio de memoria que ha hecho, que yo, sinceramente, no sería capaz de hacer, y de ahí que me auxilie siempre con tantos datos que traigo en hojas, porque, desgraciadamente, no lo puedo recordar bien.

Finalmente, después de haber consumido tanto tiempo —pido disculpas al señor Presidente y a la Cámara por ello—, quisiera dejar claro un punto en relación con alguna afirmación que se ha hecho por algún señor Senador. Quede claro, por el respeto que le debo a esta Cámara y por la obligación que tiene un gobernante dentro de un sistema democrático de dar explicación permanente y por la satisfacción que me produce hablar de agricultura, estoy encantado de venir a esta Cámara y no creo que haya ninguna razón para que Su Señoría hable de Cámara devaluada; yo estoy encantado siempre de venir a esta Cámara, tanto al Pleno como a la Comisión de Agricultura, si así lo desean, para

que se traten todos los problemas relativos al Departamento.

—————

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN SUPLEMENTO DE CREDITO POR IMPORTE DE 300.000.000 DE PESETAS PARA ATENDER OBLIGACIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE DE AUTOMOVILES DE LA GUARDIA CIVIL EN 1978-79.

El señor PRESIDENTE: Suficientemente debatida la interpelación que ponía término al punto cuarto del orden del día, pasamos al punto quinto. Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. La primera corresponde a la Comisión de Presupuestos, en relación con el proyecto de ley sobre concesión de un suplemento de crédito por importe de 300.000.000 de pesetas para atender obligaciones de funcionamiento del Parque de Automóviles de la Guardia Civil en 1978-79, publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, de 17 de junio del actual.

No se han formulado votos particulares a este proyecto de ley, por lo cual procede que se conozca por el Presidente de la Comisión de Presupuestos si en su momento se designó un miembro de la Comisión para la defensa del mismo.

Tiene la palabra el señor Nieves Borrego.

El señor NIEVES BORREGO: Sí, señor Presidente, el Senador don José María García Royo.

El señor PRESIDENTE: El Senador García Royo tiene la palabra para defender el dictamen de la Comisión.

El señor GARCIA ROYO: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, me cabe la

satisfacción de presentar ante esta Cámara el dictamen emitido en la Comisión de Presupuestos sobre un proyecto de ley que autorizaba un suplemento de crédito de 300.000.000 de pesetas con destino a la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente para su Parque de Automóviles y Helicópteros.

Se había interpuesto por parte del Partido Socialista en el Senado un veto que, posteriormente, en una gran disposición encomiable, como consecuencia de haber eximido la presencia de algún componente del Gobierno, sobre todo del área de la Dirección General de la Guardia Civil, aunque fue satisfecho por la presencia del Director General de Presupuestos, el veto fue retirado.

Brevemente, esto fue cuanto ocurrió en Comisión, puesto que allí hubo oportunidad y una serie de aclaraciones sobre extremos que vengo obligado a exponer a esta Cámara, agradeciendo, una vez más, a la Comisión el favor que me depara para exponerlos.

La necesidad de este suplemento de crédito debidamente amparado, por supuesto, desde la Ley General Presupuestaria, nacia en dos circunstancias básicas dos motivaciones. Una, la prórroga presupuestaria que no es, como saben Sus Señorías, una aprobación tardía de los Presupuestos Generales del Estado para 1980. Por otro lado, la insuficiencia presupuestaria que venía siendo cadente para esta Dirección General y para esta Sección fijada ya en los 207 millones de pesetas y que solamente allí para el año 1980 tuvo un aumento del 5 por ciento, lo cual no deja de ser lamentable cuando el costo de la vida estaba ya por el 15 por ciento.

Con estos dos motivos se nos proporcionaron datos en Ponencia para poder informar debidamente posteriormente en Comisión y ahora aquí en esta Cámara. El análisis de este déficit nace en dos apartados: el que se denomina por la Dirección General «gastos firmes» y el que se viene denominando «gastos a justificar». El de los «gastos firmes» arroja un déficit de 6.981.000 pesetas, y queremos que se sepa que la base está en lo siguiente. En febrero de 1978 se monta aquello que se venía denominando Centro Operativo de Servicios, que significa la adquisición de 600 Land-Rover por el Parque de la Guardia Civil, lo cual eleva a 6.800 el número de vehículos del mentado Parque, y que está en-

tretenido por 57 parques provinciales y 479 operarios a ello dedicados. La elevación del costo del seguro de los vehículos, las prendas de abrigo para el personal, las herramientas y utillaje que se habían adquirido, así como algunos buscadores portátiles, integran como capítulos más importantes esto que vengo en denominar «gastos firmes».

Los gastos a justificar, que presentan un déficit de 293 millones de pesetas, nacen principalmente en los bandajes, o sea, cubiertas y cámaras; carburantes —de los que luego hablaré—, repuestos, etc. Con los carburantes ocurre una cosa muy particular. Con motivo de la subida de precios y de la insuficiencia presupuestaria que teníamos en el año 1979 para esta Dirección General, existía un endeudamiento de 118 millones de pesetas para el primer semestre y se preveía para el segundo un endeudamiento de otros 151 millones; todo por diferencia de precios en carburantes, grasas, valvulinas, etc. Todo esto venía, repito, como consecuencia de la elevación de los precios de los productos en el mercado.

El Cuerpo de la Guardia Civil está usando de la benevolencia de la CAMPSA, pues está extendiendo vales hasta llegar a este endeudamiento, por lo que fue instado el Gobierno, unas veces por la vía del suplemento de crédito, otras veces por la vía de la transferencia y, finalmente, por la vía del anticipo, pues efectivamente era un gran desdoro, no creo que fuera muy correcto tener que adeudar a la CAMPSA suma tan importante por un producto como es el carburante para los vehículos del Cuerpo de la Guardia Civil, por todos conocido en su eficacia y en su presencia por los caminos y carreteras de España.

Con esta idea nada más, a este benemérito Cuerpo que del mismo modo ofrece sus víctimas en aras de un arraigo democrático que se pretende conmocionar desde el terrorismo, que vela y vigila el sosiego de los ciudadanos, a este Cuerpo que en caminos y carreteras es celoso en hacer cumplir la normativa del tráfico, ayudando al viajero en todo momento y circunstancia, a este glorioso Cuerpo que tiene el honor por lema, no podemos ni debemos regatearle, ante su esfuerzo callado y disciplinado, el nuestro parlamentario, porque su servicio, función y presencia están exigidos desde el ciudadano humilde a la Pa-

tria toda que le reclama, quiere y respeta. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Señores portavoces que deseen intervenir por los respectivos Grupos Parlamentarios? *(Pausa.)*

El señor DUARTE CENDAN: Señor Presidente, pido la palabra para una cuestión de orden.

El señor PRESIDENTE: La tiene Su Señoría.

El señor DUARTE CENDAN: Quiero recordarle los acuerdos de la Junta de Portavoces referentes a la manera de informar por parte de los Senadores, los diversos proyectos de ley, con la debida objetividad. No voy a entrar a discutir con el señor Presidente si el Senador que acaba de hablar ha sido objetivo o no, sino recordarle que es obligación del Presidente mantener la objetividad.

El señor PRESIDENTE: El Presidente tiene muy presentes sus obligaciones. Yo esperaría a que cuando el Presidente las incumpla, venga el recordatorio. Entretanto, me parece que es extemporáneo e inoportuno. No obstante, le quedo muy agradecido.

El señor Bustelo tiene la palabra, por tiempo de diez minutos.

El señor BUSTELO GARCIA DEL REAL: Señor Presidente, Señorías, los socialistas votamos que sí, pero un sí con reparos a este proyecto de ley sobre un crédito presupuestario. Votamos que sí porque, sin necesidad de acudir a la lírica del Senador García Royo, nos parece que son gastos necesarios en este caso y en el que nos llega después, porque inmediatamente tenemos otra minucia de crédito de 8.000 millones de pesetas para RENFE y, efectivamente, son gastos necesarios. Por otro lado, ¿a dónde iríamos sin la Guardia Civil y sin los ferrocarriles!

No discutimos el contenido de los gastos, la justificación de los mismos, sino que nos parece mal —de ahí nuestros reparos— esta técnica presupuestaria. Porque, ¿qué es lo que se está haciendo en esta labor de los Presupuestos?

Yo creo que lo que ocurre es que cada ser-

vicio, cada departamento, cada organismo, cuando llega el momento de mandar a Hacienda sus necesidades para el ejercicio siguiente, si necesita como siete, pide como ocho, y entonces Hacienda, por si acaso, concede como seis. Después se presentan las necesidades y hay que llegar a estos créditos presupuestarios extraordinarios, que son mala cosa; tan mala cosa, que está reconocida esa necesidad de poner coto a ellos sin la propia Ley de Presupuestos, donde se dice que sólo se podrá votar en un ejercicio el 1,5 por ciento de los gastos presupuestados.

Fíjense ustedes, por ejemplo, que para el ejercicio de 1980 tenemos unos gastos de dos billones 800.000 millones de pesetas. Podríamos votar hasta un 1,5 por ciento de esa cantidad, que serían 42.000 millones de pesetas; pues bien, parece que en los cinco primeros meses de este año han entrado en las Cortes peticiones de créditos extraordinarios por valor de 47.000 millones de pesetas. Eso para el ejercicio de 1980, porque en estos créditos de hoy resulta que estamos votando fondos para ejercicios anteriores.

¿No sería más lógico que cuando un organismo, una entidad necesitase como siete se le conceda en los Presupuestos como siete? ¿Por qué cuando se vota una partida extraordinaria para adquirir esos 600 Land-Rover que necesita la Guardia Civil no se incluyen ahí los gastos necesarios que van a acarrear esos materiales?

Ya digo que nosotros votamos que sí a estos créditos, pero si se sigue manteniendo este mal uso, nos veremos obligados a oponernos con todas nuestras fuerzas.

Aparte de esto, lo que sí pedimos —lo estamos haciendo ya— es que cuando en la Comisión de Presupuestos, cuando se planteen estas peticiones, vengan los representantes de la Administración a explicarnos, no sólo la justificación del gasto, sino por qué cuando se confeccionó el presupuesto no se incluyeron esas cantidades.

Señorías, como hoy no hay ningún Ministro en el banco azul y, cosa extraña, tampoco nos honra con su presencia el señor Presidente del Gobierno, si entre los Grupos Parlamentarios presentes hay alguno que entre los miembros de su partido tenga algún Ministerio, yo les pediría que hiciese llegar

a ellos estas preocupaciones, que creo que compartimos muchos.

El señor PRESIDENTE: Por aplicación del artículo correspondiente del Reglamento, si la Cámara está conforme, se puede someter a votación en su totalidad el proyecto de que se trata. Si no hay inconveniente, oído el parlamento del portavoz del Grupo Socialista, y sin contradicción, se puede entender aprobado por asentimiento este dictamen. *(Pausa.)*

Queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de ley sobre concesión de un suplemento de crédito por importe de 300.000.000 de pesetas para atender obligaciones de funcionamiento del Parque de Automóviles de la Guardia Civil en 1978-79.

— DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN SUPLEMENTO DE CREDITO POR UN IMPORTE DE 8.139.000.000 DE PESETAS COMO SUBVENCION COMPENSADORA DEL DEFICIT DE EXPLOTACION DE RENFE EN EL EJERCICIO DE 1979.

El señor PRESIDENTE: El siguiente dictamen es también de la Comisión de Presupuestos, en relación con el proyecto de ley sobre concesión de un suplemento de crédito por un importe de 8.139.000.000 de pesetas como subvención compensadora del déficit de explotación de RENFE en el ejercicio de 1979, cuya publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» es de 17 de junio de 1980.

El señor Presidente de la Comisión de Presupuestos, o quien le sustituya, tiene la palabra. ¿Quién, señor Subirats?

El señor SUBIRATS PIÑANA: Señor Presidente, como no hay Presidente ni Vicepresidente primero, entra en funciones el Vicepresidente segundo.

El señor PRESIDENTE: Está suficiente y debidamente representada la Comisión por el señor Subirats.

Tiene la palabra el señor Subirats para de-

cir qué señor Senador designó la Comisión para la defensa del dictamen de la misma.

El señor SUBIRATS PIÑANA: La Comisión designó para hacer la crónica del dictamen a don José Manuel García-Verdugo.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador García-Verdugo como expositor defensor del dictamen de la Comisión.

El señor GARCIA-VERDUGO CANDON: Señor Presidente, Señorías, para relatar a la Cámara el trayecto del proyecto de ley de concesión de un suplemento de crédito por un importe de 8.139.000.000 de pesetas como subvención compensadora del déficit de explotación de RENFE en el ejercicio de 1979.

El proyecto, procedente del Congreso de los Diputados y con billete de ida y vuelta, llegó, con parada y fonda, a la Comisión de Presupuestos, donde encontró bajada la barrera del paso a nivel, barrera que constituía el factor de una enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Socialista de esta Cámara.

La Ponencia designada al efecto en el seno de la Comisión para emitir informe sobre este proyecto de ley, integrada por los Senadores don Ubaldo Nieto de Alba, don Manuel Nadal Gaya, don Raimundo García Arroyo, doña Amalia Iranzo Martínez y don Josep Subirats Piñana, acordó por mayoría no admitir a trámite esta propuesta de veto, informando, en consecuencia, favorablemente este proyecto de ley que motiva hoy mi intervención ante la Cámara.

El veto no se hizo voto, es decir, no realizó el transbordo hasta este Pleno de la Cámara porque, cumpliendo lo que la Ponencia había sugerido o manifestado como conveniente, los responsables del área financiera de RENFE, a quienes en este caso acompañaba también el señor Subsecretario del Ministerio de Transportes —hoy dignamente sustituido—, posiblemente en uno de sus últimos actos administrativos, comparecieron ante el Pleno de la Comisión para informar, como se les pedía, y sus explicaciones debieron convencer a los Senadores formuladores del veto, ya que tal enmienda a la totalidad fue retirada.

Convendría ahora explicar a la Cámara el desglose de las cifras que constituyen el enunciado déficit, aunque tal vez fuera más conveniente, en este caso, hablar de factura que se pasa al conjunto de la sociedad española por el uso y disfrute —este último a veces eufemístico— de un servicio público. Yo iba a entrar, a continuación, en el desglose de los renglones que constituyen esta factura que se pasa a la sociedad española, pero quizá sea conveniente —y no tenía intención de hacerlo— exponer a Sus Señorías, o por lo menos leer un poco, saltándome lo que no haga al caso, lo que establece el artículo 75 del Estatuto de RENFE, aprobado por Decreto de 23 de julio de 1964, que dice así: «Todos los créditos presupuestarios que se doten para hacer efectivos los pagos del Estado a RENFE según los artículos 61 y 73 se pagarán por trimestres, vencidos en el primer caso y anticipados en el segundo».

Los artículos citados corresponden, el primero de ellos, a explotación y el segundo a inversiones. Y sigue diciendo: Si el resultado de las expresadas liquidaciones hiciera innecesaria la aplicación de la totalidad de dichos créditos, su remanente a fin de año quedará anulado. Si, por el contrario» (que es el caso que nos ocupa) «dichos créditos resultasen insuficientes según la liquidación de explotación, el Gobierno gestionará, inmediatamente que exista constancia de este hecho, el oportuno expediente de suplemento de crédito».

Voy a permitirme leer también lo sustancial que aparece en el artículo 64 de la Ley General Presupuestaria del 4 de enero de 1977, que dispone lo siguiente:

«Cuando haya de realizarse con cargo a los Presupuestos del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en ellos crédito o sea insuficiente..., el Ministerio de Hacienda elevará al acuerdo del Gobierno la remisión de un proyecto de ley a las Cortes de concesión de un crédito extraordinario... o de un suplemento de crédito...».

Dicho esto, voy a pasar a exponer a Sus Señorías los renglones o, si lo prefieren, los raíles que constituyen esta factura, que creo es la tercera vez que menciono. Hay tres renglones, que iremos llamando sucesivamente A, B y C.

El renglón A dice: «Por suplemento para gastos de personal, 2.915 millones de pesetas. Tal vez aquí sea conveniente decir que el 70 por ciento del presupuesto general de RENFE corresponde a gastos de personal. De ellos, de esos 2.915 millones de pesetas, 1.194 millones se deben a diferencias entre la cifra de partida, tomada como cierre provisional el año 79 en el momento de realizar el presupuesto, y el cierre definitivo del año. Otros 1.362 millones de pesetas, por diferencias en el índice del incremento de la masa salarial, estimado en principio en el presupuesto en un 11 por ciento y que, como consecuencia de la aplicación del convenio colectivo, se elevó a un 13 por ciento. Por otra parte, otro factor que incide en el mismo sentido es que el Decreto 82/1979, de 19 de enero, sobre cotización a la Seguridad Social por horas extraordinarias, ha supuesto a RENFE unos costes incrementales en Seguridad Social de 359 millones. Esto totaliza los 2.915 millones de pesetas de este capítulo de personal.

En el apartado B se contempla el suplemento solicitado por el concepto de ingresos de mercancías, 2.585 millones de pesetas, en el que se han tenido en cuenta, en primer lugar, las diferencias habidas entre el cierre real y el previsto, tomado como base para el control laboral. Se han incluido también, en segundo lugar, la valoración de la no subida de tarifas en los seis primeros meses del año. El primer concepto importa 815 millones de pesetas y el segundo 1.770 millones de pesetas.

Por último, hay un tercer renglón, el C, que se refiere a ingresos de viajeros. Solamente por los mismos factores considerados en mercancías, se solicitan 1.018 millones por diferencias, de cierre del año 78, y 1.621 por la no elevación de tarifas en el primer semestre del ejercicio.

Y como no hay Senador que se precie que descienda de esta Tribuna sin esgrimir latines o sin hacer una cita profunda a un poeta, yo no quiero ser menos, y como entre mis autores latinos más leídos, Ovidio, Virgilio y Cátulo, que son los que habitualmente consulto, no he encontrado ninguna referencia a RENFE (*Risas.*), he tenido que acudir a mi ya declinante memoria poética y no he encontrado más que unos endecasílabos o, por

mejor decir, unos «endecasilabos», porque a estos versos de arte mayor, como a ciertas categorías de políticos, a veces les va bien el diminutivo. Voy a tratar de memorizarlo —hoy no está el señor Arbeloa para corregirme y lo hago mucho más relajado—, y decían así: «Mi carta, que es feliz, pues, va a buscaros, cuenta os dará de la memoria mía». El Senador Arbeloa habría adivinado, si aquí estuviera, que se trata de aquellos versos de don Ramón Campoamor, que además era Diputado por Asturias, aunque esto no tiene nada que ver con lo que dicho anteriormente, y que el título del poemilla era «El tren expreso».

El señor PRESIDENTE: ¿Señores Portavoces que vayan a intervenir? (*Pausa.*)

El Senador Casademont, por el Grupo de Senadores Vascos, tiene la palabra.

El señor CASADEMONT PERAFITA: Señor Presidente, señorías, cada vez que en el orden del día me encuentro con un proyecto de aprobación de estos créditos extraordinarios me pongo nervioso, y me pongo nervioso porque me imagino, visto desde un prisma empresarial, que esto es un fallo de las previsiones: un fallo por error o un fallo premeditado.

Yo no sé si para el cuadro de los presupuestos conviene partir de los datos erróneos para poder hacer este cuadro, o bien si, con un absoluto desconocimiento de lo que va a pasar en el año, se fijan unas cifras que luego resultan erróneas en miles de millones de pesetas.

Yo no he entendido bien, no he podido seguirlo, no he estado en la Comisión y por eso me faltan datos para profundizar más, pero he oído al ponente que presentaba este proyecto hablarnos, por ejemplo, me parece que de mil millones de pesetas porque no se había previsto el nuevo convenio. Yo supongo que estaría previsto que habría un nuevo convenio en la fecha tal.

Ha habido otra cantidad de dos mil y pico millones de pesetas por ingresos de mercancías, etcétera. Si estas fueran unas cifras razonables de un error del cuadro del presupuesto, lo aceptaría, conforme ocurre en cualquier presupuesto, desde la pequeña tienda

de la esquina hasta la empresa mayor y hasta la RENFE, por muy conflictiva que sea.

Por tanto, yo no quiero, de ninguna forma, es colaborar en decir todos unánimemente que sí siempre a estas diferencias de miles de millones de pesetas, que así va el país. Estos señores de la RENFE creerán que lo hacen muy bien, tanto presupuestando como liquidando los presupuestos. Como tampoco puedo acusar a los señores de la RENFE de que lo han hecho muy mal, o de que el presupuesto estaba previamente mal hecho pensándolo, no puedo votar en contra, pero como tampoco puedo hacerlo a favor, porque creo que conviene ya que en nuestras Cámaras se ponga más atención en la aprobación de estos presupuestos, por un lado, y, por otro, que los señores que están esperando la aprobación de los presupuestos vean que hay por lo menos algún pronunciamiento de que no todos estamos de acuerdo, nosotros nos abstendremos en esta votación.

El señor PRESIDENTE: El Senador Bustelo, por el Grupo Socialista del Senado, tiene la palabra.

El señor BUSTELO GARCIA DEL REAL: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, dos o tres consideraciones sobre este crédito extraordinario.

La primera es que el tema de RENFE yo creo que les podría hacer meditar a nuestros amigos de UCD, tan partidarios de la economía social de mercado, porque la mano invisible del mercado —que, por cierto, se ve muy poco en estos tiempos de crisis— resulta que en entidades tal importantes como RENFE no sirve, que esos criterios no funcionan.

El Subsecretario de Transportes, que nos hablaba con mucha autoridad en la Comisión de Presupuestos, precisamente porque unas horas después iba a ser nombrado Presidente de RENFE, nos decía que no se podía hablar de déficit de explotación, que había que acudir al criterio de rentabilidad social, que a los socialistas nos gusta mucho, y que, por lo tanto, habría quizá que acuñar otros conceptos para explicar estas cantidades que precisa RENFE cada año, porque puede perder dinero, y de hecho pierde alguno, en el transporte de pasajeros, pero está prestando un

servicio indudable al país. Y nosotros estamos muy de acuerdo con esos conceptos.

Luego está el tema de la eficacia o de la productividad de RENFE, aunque no es quizá el momento, entre otras cosas porque no tenemos tiempo, para meternos a fondo con este tema. Parece que RENFE está haciendo un gran esfuerzo para mejorar su productividad. En Comisión nos sorprendieron algunas afirmaciones sobre, por ejemplo, que el aprovechamiento del material en España es el más alto de toda Europa. Nosotros celebramos mucho que así sea, y que siga esa labor tan necesaria, porque nos parece que RENFE en años pasados funcionó, a decir verdad, bastante mal.

Luego queda este aspecto de la técnica presupuestaria, que realmente en el caso de la Red Nacional de Ferrocarriles llega, quizá, a extremos demasiado acusados.

Nosotros comprendemos muy bien la preocupación del señor Casademont, porque resulta que cuando yo hablaba antes de que podemos votar este año, como máximo, 42.000 millones de pesetas de créditos extraordinarios, ahora estamos votando 8.000 millones de pesetas del ejercicio de 1979 para RENFE. ¿Cuándo vamos a tener que votar de crédito extraordinario para el ejercicio de RENFE de 1980? Nosotros lo preguntamos en la Comisión y no nos pudieron dar cifras.

Es cierto que hay dificultades objetivas. El proceso inflacionario y la subida de los costos energéticos dificultan mucho el poder hacer previsiones más o menos exactas sobre lo que va a ingresar y gastar RENFE en un ejercicio determinado, pero, señorías ¿tanto como un déficit de 8.000 o 10.000 millones de pesetas?

Eso nos parece excesivo. Por eso tenía mucha razón el Senador Casademont, y esto guarda relación con lo que dije en mi intervención anterior sobre el crédito para la Guardia Civil, y es que las previsiones que se hacen se quedan, yo creo, exprofeso cortas, porque, por ejemplo, RENFE preveía para 1979 una subida de salarios sólo del 11 por ciento; luego fue por convenio del 13 por ciento. Parecía lógico que se hubiese acercado ya desde el principio al 13 por ciento.

Por lo tanto, nosotros volvemos a votar sí, pero volvemos a votar también con reparos y esperamos que estos créditos extraordinarios

se vayan limitando lo más posible. A ver si ahora que se está haciendo la labor de preparación presupuestaria del ejercicio de 1981 el Gobierno es capaz de presentarnos un presupuesto para el año que viene donde realmente estos créditos extraordinarios sean de verdad eso, extraordinarios, y no habituales. muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El Senador Vilodres, del Grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor VILLODRES GARCIA: Señor Presidente, señorías, con habitualidad aprobamos en esta Cámara créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

Como conocen Sus Señorías, el crédito extraordinario corresponde a una dotación insuficiente en los presupuestos y el suplemento de crédito es para cuando surge una nueva necesidad. Pero muchos de estos créditos extraordinarios proceden de proposiciones a iniciativas de la oposición. Recordamos que hace unos días, en el Congreso de los Diputados, el Vicepresidente del Gobierno, don Fernando Abril decía: «Aquí, cada vez que se aprieta el botón está costando 1.000 millones de pesetas».

Nos parece muy bien la idea de contención del gasto público por parte de la oposición, como es el criterio del Gobierno y del partido que apoya al Gobierno, y tomamos muy buena nota de esta idea. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación, si ha lugar, una vez que la Cámara autorice que se considere en su totalidad, el dictamen que contemplamos. ¿Se acepta? (Pausa.) Ya ha anunciado el señor Casademont que no hay asentimiento.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 118; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la Comisión.

En consecuencia, se declara aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de ley sobre concesión de un suplemento de crédito por un importe de

8.139.000.000 de pesetas como subvención compensadora del déficit de explotación de RENFE en el ejercicio de 1979.

— DE LA COMISION DE DEFENSA, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE REGULAN LOS CRITERIOS BASICOS DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA ORGANIZACION MILITAR.

El señor PRESIDENTE: Llegamos al dictamen de la Comisión de Defensa, en relación con el proyecto de Ley Orgánica por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de fecha 17 de junio actual.

Se han formulado diversos votos a este proyecto de ley.

Señor Presidente de la Comisión de Defensa ¿ha habido designación de defensor expositor del dictamen?

El señor BALLARIN MARCIAL: Ha sido designado el señor Martín Villa.

El señor PRESIDENTE: El Senador Martín Villa tiene la palabra a tal efecto.

El señor MARTIN VILLA: Con la venia, señor Presidente, señoras y señores Senadores.

Creo estar en condiciones de aceptar el título de cronista que el Senador Subirats ha dado a los relatores de cómo en las Ponencias y en las Comisiones se desarrollan los proyectos de ley. Creo además —porque por formación profesional me gusta hablar casi sin apuntes— que voy a ser muy breve.

La ley que vamos a debatir —y voy a empezar con unos números— tuvo 31 enmiendas. Las 31 enmiendas corresponden: 21 al Grupo Socialista, siete al Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, y las tres restantes al Grupo Mixto. Es más, creo que hay que añadir una enmienda «in voce» formulada por el Senador del Grupo Mixto señor Bosque Hita.

Estas enmiendas, a efectos de exposición,

yo las agruparía en cuatro apartados: unas que se referían a cuestiones de concepto, otras que se referían a cuestiones de atribución de competencia, otras que eran de simple perfeccionamiento técnico de la ley y, por último, la más conocida o, al menos, la que más ha sonado en los medios de comunicación social, que es la referida al carácter militar implícito o explícito del Cuerpo de la Guardia Civil.

Entre las cuestiones de concepto podemos señalar aquellas que hacen referencia al Plan Estratégico y al objetivo de fuerza conjunto. Singularmente se centraron las discusiones en torno a los artículos 4.º y 6.º del proyecto de ley y alguien, en la Comisión, calificó aquello de diálogo de sordos, porque resulta que las posturas encontradas realmente no podían acercarse, ya que mientras el Grupo Centrista sostenía un concepto de lo que era el Plan Estratégico y del encuadre del objetivo de fuerza conjunto dentro del Plan Estratégico, el Grupo Socialista y el Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo mantenía otro concepto diverso. Por eso, como eran, no divergentes, sino paralelos los conceptos, y distintos, no se pudo llegar a un acuerdo.

Mayoritariamente, la Ponencia, primero, y la Comisión, después, aceptaron la tesis centrista y, naturalmente, los Grupos, digamos divergentes, que querían enriquecer la ley con sus divergencias se reservaron el voto para este Pleno.

Otro haz de enmiendas que hacen referencia a las cuestiones de atribuciones estaba en la distinta concepción de la articulación de los órganos de defensa. La jerarquía de los órganos de defensa era clara, pero las competencias de cada uno de los órganos era distinta para unos y otros Grupos.

Al intento de perfeccionar la ley pertenece el tercer grupo de enmiendas. El Grupo Centrista entendió que la ley era perfeccionable, pero que la alternativa que se le ofrecía era menos perfecta que la que constaba en el proyecto de ley. La oposición, no la oposición «in genere», sino la oposición a la redacción de estos preceptos entendía que sus propuestas, realmente perfeccionables, hacían la ley más perfecta, y se reservaron también,

naturalmente, sus puntos de vista para defenderlos en el Pleno.

Por último, el tan traído y tan llevado tema de la Guardia Civil. Entendía el Grupo Centrista —supongo que después tendremos ocasión de defenderlo; ahora me limito a ser cronista, en la terminología acuñada por el Senador Subirats—, que iba implícito y que, conocido el carácter militar del Cuerpo de la Guardia Civil adscrito al Ejército de Tierra, era innecesaria la matización, y entendía el enmendante, señor Pinilla, que debía explicitarse en el proyecto el carácter militar del Cuerpo de la Guardia Civil.

Creo que con esto he terminado mi crónica. Creo —por lo menos lo he intentado—, haber conseguido la objetividad en el relato. Al menos creo, eso sí, que lo he hecho bastante breve, y como esta tarde el Senador García-Verdugo ha hecho un referencia a los latines y a los poetas que son de su agrado, recuerdo ahora una cita de Olvido cuando exiliado de Roma decía: Cuando recuerdo aquella triste noche, que fue la última o de las últimas en mi ciudad de Roma.

Pues bien, nosotros no vamos a ir exiliados, pero dentro de poco vamos a tener vacaciones. Yo no quisiera haberme alargado lo suficiente para que mi primera intervención esta tarde la Cámara la recordara tristemente; al menos por breve, espero que me lo agradezcan. Señor Presidente, señoras y señores Senadores, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Rodríguez Sahagún): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, si siempre es un honor para este Ministro comparecer en el Senado, comparecer en esta Cámara, sí puedo significarles que hoy siento una especialísima satisfacción con razón de esta comparencia. Y ello porque creo que al estar aquí, al dirigirles la palabra a Sus Señorías desde esta tribuna no solamente cumplo con un deber de cortesía parlamentaria, con una atención que les debo, ni tampoco porque, aunque sea por los pelos, he podido manifestar ese extraño don de la ubicuidad que a veces hemos de tener los Ministros para estar al

mismo tiempo en las dos Cámaras; aquí presentando el proyecto que hoy se va a debatir, en el Congreso votando y dirigiendo el debate en relación con la reforma del Código de Justicia Militar, por la coincidencia en el tiempo de los dos proyectos; sino, fundamentalmente, porque quiero dar testimonio, porque quiero dar fe de la trascendencia y de la importancia que entiendo tiene el proyecto de Ley Orgánica de criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar que van a comenzar a debatir Sus Señorías y que espero de la bondad del propio proyecto y de Sus Señorías sea aprobada prontamente en esta Cámara.

Entendemos que este proyecto de criterios básicos es, puede ser, debe ser, va a ser, porque tenemos la voluntad política para que así sea, la plataforma necesaria, la plataforma indispensable que permita el desarrollo global, coherente y armónico de todos los aspectos de la defensa, de tal manera que se garantice que va a ser capaz de hacer frente, no a eso que se llamó el desafío de la guerra, sino a lo que yo creo que hoy, en el año que vivimos, en la política actual y moderna, se llama en todas partes el desafío de la paz.

Hace poco menos de cincuenta años, un ilustre predecesor en la cartera que a mí me toca desempeñar, más o menos porque no era exactamente el mismo contenido, don Manuel Azaña, refiriéndose al concepto de la libertad, decía que la libertad es fundamental para los hombres no porque la libertad permita a los hombres ser más felices, sino simplemente porque les permite ser hombres.

Permítanme Sus Señorías que, en paralelo, yo me atreva a decir unas palabras semejantes de la defensa en relación con el Estado. La defensa es fundamental para el Estado, no porque permita que los estados sean, con un sistema adecuado de defensa, más poderosos, sino simplemente porque les permite ser estados, porque, sin un sistema eficaz de defensa, sin una defensa proporcionada, no hay Estado, porque no se puede ejercer la soberanía, no se puede garantizar la independencia, no se puede defender la integridad territorial.

En un mundo difícil y complejo, cambiante, como el que vivimos, una nación sólo es

soberana si tiene verdaderamente voluntad de defensa, si tiene verdaderamente una disposición para asumir los esfuerzos y los sacrificios que comporta el defenderse, y una nación que no está dispuesta a defenderse a sí misma no puede aspirar, no puede esperar el socorro de las demás.

Pues bien, Señorías, yo entiendo que este proyecto de Ley Orgánica de criterios básicos que hoy se presenta aquí tiene fundamental y exclusivamente ese objetivo: disponer un sistema de defensa eficaz, claro, nítido, debidamente ordenado y en el que, además, de una vez por todas, se deje absolutamente claro, absolutamente nítido un punto fundamental, la subordinación de la organización militar, la subordinación del instrumento militar, la subordinación del potencial militar al poder civil, representado por el gobierno legítimo de la nación, y la participación de las diversas instituciones en las tareas de de la defensa, la participación de los diversos organismos, de los diversos individuos, de los diversos entes. Partimos aquí de un concepto moderno de la defensa, de ese concepto global, porque hoy ya el conflicto, la guerra, no puede ser concebido como un enfrentamiento entre dos ejércitos, sino que ha de ser contemplado como ese enfrentamiento global entre dos estructuras nacionales, y la defensa, por tanto, en los términos que concebía Clausewitz debe ser también enfocada, asumida como un esfuerzo de integración, de coordinación, de todas las actividades materiales y morales, de todas las fuerzas, de todos los recursos de la nación, para hacer frente a las garantías que requieren, que necesitan los ciudadanos, a las garantías del mantenimiento de una comunidad de hombres libres y responsables, porque si está clara una cosa hoy día es que una sociedad de libertades, es que una sociedad libre, es que esa comunidad, es que una comunidad para la convivencia pacífica no puede ser una comunidad débil ni inerte, sino que debe ser una comunidad capaz de garantizar ese ejercicio de la soberanía, capaz de preservar su independencia, capaz de preservar su integridad territorial. Todo ello, Señorías, en un planteamiento que parte, fundamentalmente, de la consideración de los temas de la defensa como competencia exclusiva del Estado y

que va estacaleciendo, dentro de esa visión global general, cuáles son las competencias de cada uno de los organismos a partir de lo que señala el artículo 5.º, que dice corresponde a Su Majestad el Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas y de las otras funciones que le encomienda la Constitución, las Reales Ordenanzas y restantes disposiciones legales.

Por ello, el Gobierno interpretó que no podía entenderse en un sentido estricto el mandato constitucional del artículo 8.º, referente a la presentación de una Ley Orgánica de las Bases de la Organización Militar, porque no habría tenido sentido dar el rango orgánico a lo particular, a lo concreto, la Organización Militar, sin haber enfocado también con ese mismo rango lo más amplio que es el concepto de la Defensa Nacional.

En esta ley de criterios básicos se van examinando una a una cuál es la actuación de los distintos organismos, cuáles son las competencias de las Cortes Generales, su misión de aprobar las leyes de la defensa, su misión concerniente a los créditos presupuestarios para atender las necesidades de la defensa, su misión en cuanto al debate de las líneas generales de la política de defensa y del armamento y de sus realizaciones en los aspectos de inversión, su misión en cuanto a la serie de autorizaciones previstas en los artículos 63 y 94 de la Constitución y su misión, sobre todo, en cuanto al control de la acción y del ejercicio del Gobierno, a través de los procedimientos establecidos y a través de una comparecencia periódica que al menos a este Ministro le gustaría realizar como ha venido haciendo en el seno de la Comisión y como le gustaría también hacerlo, señor Presidente —y acudiré a los trámites preceptivos para ello—, probablemente, después de esas vacaciones a las que se refería el Senador Martín Villa, en el Pleno de esta Cámara, para informar, como consecuencia de la aprobación de estos proyectos, de cuál es el sentido, de cuál es el lugar, de cuál es la posición en que nos encontramos en ese proceso que se ha dado en llamar de la reforma militar.

Al Gobierno, Señorías, corresponde la determinación de la política de defensa y asegurar su ejecución, asistido para ello por la Junta de Defensa Nacional y, en concreto, al Pre-

sidente del Gobierno dirigir y coordinar la acción de los miembros del mismo, en relación con esta política de defensa, de acuerdo con lo que establecen los artículos 97 y 98 de la Constitución, que reservan al Gobierno la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.

Al Ministro de Defensa corresponde, dentro de esta ley de criterios básicos, y según esta ley de criterios básicos, la ordenación y coordinación inmediata de las tareas de la defensa, así como la ejecución de la política militar, y le corresponde también la dirección de la política de defensa en aquellos puntos concretos que no se reserve para sí el Presidente del Gobierno. Cuenta para ello con una serie de organismos, con una serie de entes, con una serie de entidades, entre las cuales desearía destacar, por un lado, las referentes a la llamada «cadena de mando militar», encabezada por la Junta de Jefes de Estado Mayor, como órgano colegiado superior de dicha cadena de mando; Junta de Jefes de Estado Mayor que, tal y como preceptúa con absoluta nitidez y por primera vez esta ley de criterios básicos, depende del Presidente del Gobierno, quien ejerce su autoridad a través del Ministro de Defensa, salvo en aquellos puntos concretos que se reserve el propio Presidente.

Los Jefes de Estado Mayor de cada uno de los tres Ejércitos ejercen el mando de estos ejércitos bajo la autoridad, también, del Ministro de Defensa, siendo responsables de la operatividad y de la eficacia de cada uno de esos ejércitos dentro de los recursos que les han sido asignados, en la misma manera que la Junta de Jefes de Estado Mayor es, y debe ser, responsable de la operatividad y de la eficacia conjunta de los tres Ejércitos dentro, asimismo, del volumen, del nivel de los recursos asignados.

Cuenta también el Ministro de Defensa con otra serie de organismos asesores, de los llamados Organismos Centrales de la Defensa, para su función financiera, administrativa, para su función de administración de tales recursos, así como de toda una serie de organismos de información.

Repito que esta ley va examinando una a una cuáles son las competencias de cada uno de los organismos, va profundizando en el re-

parto de dichas competencias y en la asignación de los planteamientos. Creo, sinceramente, que esta ley es perfeccionable, por supuesto, como decía el Senador Martín Villa (y yo diría que no sólo perfeccionable, sino que, además, seguramente, algunas de Sus Señorías en los planteamientos que se han hecho en los trabajos de Comisión, han echado en falta la posibilidad de una mayor concreción), pero quisiera recordarles que se trata de una ley de criterios básicos que, como tal, debe ser general y que debe, en mi opinión, reunir esa doble condición y esa doble cualidad de ser al mismo tiempo genérica, para tener una permanencia y tener un marco de flexibilidad; ser permanente en lo trascendental, en lo fundamental, en lo que debe durar y permanecer —valga la redundancia—, y ser flexible en todo aquello que se debe adaptar, periódicamente, en función de las circunstancias, en función de la coyuntura que en cada momento nos toque vivir.

Creo que esta ley en ese concepto, en esa concepción de criterios básicos, cumple con este cometido, con la mirada siempre puesta en que seamos capaces de disponer de ese sistema de defensa eficaz. Un sistema de defensa que va más allá de las Fuerzas Armadas; pero sabiendo que las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas modernas, constituyen su núcleo fundamental. Unas Fuerzas Armadas y un sistema de defensa que constituyan en sí mismos un elemento, un factor de disuasión, que tengan capacidad de reacción inmediata ante cualquier ataque y que, al mismo tiempo, tengan capacidad de apoyo a nuestra política exterior.

Porque yo creo, Señorías, que se puede decir, hoy más que nunca, que se trata antes de evitar y de prevenir que de ganar, y por ello es necesario e imprescindible, el factor y la capacidad de disuasión. Que se trata, caso de que exista un ataque, disponer de la capacidad de reacción imprescindible para poder defender nuestros intereses, los intereses nacionales, y para poder obtener la victoria si llega el caso. Y que se trata de disponer de capacidad de apoyo para nuestra política exterior, porque no nos engañemos, sin unos instrumentos adecuados no existe ni existirá jamás suficiente autonomía de decisión; no existe ni

existirá jamás una verdadera política internacional.

Señorías, creo que esta es una ley de criterios básicos, que son los criterios aquí contenidos, desarrollables después en la serie de leyes que aquí mismo se apuntan, y que aquí mismo se contemplan, y quiero recordar a Sus Señorías, como las más inmediatas, la Ley de Defensa Nacional, que va a desarrollar los aspectos económico, civil y militar de la defensa; la Ley de Organización Militar, que ha de puntualizar todos los aspectos concretos (algunas cuestiones se ha querido, por parte de algunas de las enmiendas, que quedarán puntualizadas en esta ley de criterios básicos y yo creo que no es el lugar adecuado para dicha puntualización); entre otras, también la Ley del Servicio Militar; y las leyes que van a referirse a todos los planteamientos de reforma de personal, que estamos realizando. Yo creo que, en todos estos temas, la regla de oro de la vida debe ser comenzar, y nosotros hemos comenzado un proceso de reforma que nos va a permitir avanzar sustancialmente en la consecución de ese instrumento de eficacia, pero que nos va a permitir, al mismo tiempo, disponer de unos marcos profesionales en los cuales no existan las frustraciones que se dan en los momentos actuales, sino que, por el contrario, se permita la disposición y la colocación del hombre adecuado en el puesto adecuado, que permita la realización integral de las personas y de los mandos que han elegido la vocación militar; que se disponga, verdaderamente, de un planteamiento que garantice un modelo de carrera coherente, un modelo de carrera que sea estimulante en lugar de ser frustrador, como a veces ha ocurrido en los momentos actuales, por los agrupamientos que han existido, por los embotellamientos, por los cuellos de botella que se han creado.

Es necesario un planteamiento de la defensa y un sistema de la defensa que garantice que vamos a disponer de una industria de base para atender nuestras principales necesidades, sin utopías, por supuesto, pero sí con unos planteamientos de realismo, haciendo realidad las posibilidades de que disponemos en nuestra patria, en nuestro aparato productivo. Un sistema de defensa que, en todo caso, cuando dentro de equis años el civil que yo espero siga siendo otro Ministro de la De-

fensa vuelva a comparecer aquí, sea con ocasión de unos presupuestos, sea con ocasión de una nueva ley, de una nueva disposición, no tenga que repetir, como el que hoy se presenta ante Sus Señorías, argumentos, palabras y situaciones de hace décadas y décadas, de años, porque la triste realidad es que, como ya han tenido ocasión de oír muchos de los señores Senadores y Senadoras aquí presentes, disponemos en los momentos actuales de unos Ejércitos numerosos, pero insuficientemente dotados. Y la triste realidad es que yo aquí podría repetir la retahíla de argumentos, de comentarios y de lamentaciones que hace diez, veinte, treinta, cuarenta y cincuenta años repitieron y ensartaron todos los que me precedieron en el cargo.

Quiero evitar que esto ocurra en el futuro, y por eso no nos vamos a limitar, no nos estamos limitando a decir las mismas palabras que ellos dijeron, sino que, además, haremos, estamos haciendo, la reforma que era imprescindible.

Creo, Señorías, que esta ley de criterios básicos es el punto central que va a permitir el desarrollo de todos los aspectos de esa reforma de una manera, como antes he dicho, coherente y armónica, unificando un lenguaje, clarificando conceptos, determinando competencias, de una vez por todas, en unos temas delicados, trascendentales e importantes, en los que no siempre ha existido claridad. Quizá por el hecho de que se ha legislado en diversos momentos históricos y no se ha procedido a partir de la base que hoy constituye este proyecto de reforma, ha existido, a veces, la suficiente claridad.

Por ello permítanme Sus Señorías que, conociendo como conozco que el Senado ha sabido asumir, desde el primer momento, ese concepto de que la defensa es algo que nos concierne a todos, que todas y cada una de Sus Señorías sienten la defensa nacional como algo propio, y estoy seguro de que en todo momento van a apoyar a quien tenga la competencia y responsabilidad de este tema, como cuestión fundamental, en llevar adelante su tarea; por eso permítanme Sus Señorías que pida su apoyo para la ley que hoy van a comenzar a debatir, en la seguridad de que es una ley fundamental, decisiva para llevar adelante esa tarea de la reforma en un proceso

gradual, no en un proceso violento en cuya eficacia yo no creo en el campo militar, sino en un proceso gradual hecho desde la comprensión, desde la confianza en lo militar, hecho a través de un esfuerzo sostenido y permanente que nos garantice esos niveles de eficacia que estamos persiguiendo, sabiendo que este es un tema tan importante, tan trascendental, que de él puede depender algún día el destino de nuestra nación; que de él puede depender y depende la sociedad que seamos capaces de dejar a nuestros hijos; que de él puede depender y depende la supervivencia del Estado, y que es el tema, la función prioritaria y primordial del Estado, porque sin garantizar esta supervivencia no podemos garantizar ninguna otra función de las que al Estado corresponde.

Yo sé que en el pasado nuestros antiguos supieron defender nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra integridad territorial; y estoy seguro de que nuestros hijos podrán decir de nosotros lo mismo; que nosotros también supimos establecer la normativa, los medios, los instrumentos necesarios y el proceso adecuado para poder cumplir con la misión que a la defensa le asigna la Constitución, que a las Fuerzas Armadas les asigna la Constitución, de garantizar la soberanía y la independencia de España y defender nuestra integridad territorial y nuestro ordenamiento constitucional.

En la seguridad de que este es un proyecto de ley que a ello contribuye, en la seguridad de que es un proyecto de ley básico, fundamental, para que, en todo momento, se pueda ayudar a defender España y a preservar la paz de todos los españoles, es por lo que he querido comparecer ante Sus Señorías antes de comenzar el debate, para pedir su apoyo en la aprobación de esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Habiendo votos particulares, procede conceder, si a ello hay aspirantes, un turno a favor, otro en contra, a la totalidad, y la intervención de los portavoces que lo deseen, también respecto a la totalidad.

¿Turno a favor? (Pausa.)

¿Turno en contra? (Pausa.)

¿Portavoces? (*Pausa.*)

Señor Pinilla, ¿pide turno de portavoces?

El señor PINILLA TURINO: No, señor Presidente, turno en contra.

El señor PRESIDENTE: Perdón, no le había visto.

El Senador Pinilla tiene la palabra para turno en contra.

El señor PINILLA TURINO: Señor Presidente, Señorías, deseo hacer una observación previa. Aunque pertenezco al Grupo Parlamentario Mixto, no intervengo en nombre de éste, sino de sólo parte de sus miembros. Tampoco lo hago exclusivamente en representación de un Grupo o Partido político determinado; trato sencillamente de traer aquí la voz y la razón de muchos españoles que esperan con ansiedad lo que esta Cámara decida sobre el proyecto de ley por el que se regulan los criterios básicos relativos a la Defensa Nacional y a la Organización Militar y, sobre todo, especialmente uno de sus artículos, el artículo 38.

Vamos a discutir esta ley en unos momentos de máxima expectación política. La importancia que la Guardia Civil ha tenido y tiene en el proceso y desarrollo de la vida española ha sido expuesta una vez más en recientes acontecimientos. El proyecto de ley que nos ocupa reviste una importancia singular, lo ha subrayado el señor Ministro; es sin duda un propósito laudable que, por la entidad de su contenido, no tiene precedentes legislativos en nuestra historia. Pues bien, de este proyecto lo que la gente comenta en la calle y discute en los medios de difusión, es el artículo relativo a la Guardia Civil. El pueblo español tiene bien abiertos los poros de la sensibilidad, barrunta que a él le va mucho en el tema, y de ahí su inquietud alertada.

Esta Cámara siempre se ha producido con rigor y serenidad y ha defendido con plausible celo las áreas de su competencia. Su libertad en la elaboración de las leyes no ha estado hipotecada por decisiones ajenas. Ahora tiene una nueva oportunidad de usar de su libertad y de afirmar, precisamente, su competencia. Tened por seguro, señores Senadores, que lo que esta Cámara decida sobre este proyecto

de ley, para bien o para mal, irá a escribirse en las páginas de la historia de nuestra patria.

Algunos países europeos habían creado ya diversas instituciones encargadas del mantenimiento del orden y de la persecución de malhechores. España seguía confiando estas misiones a los organismos locales y provinciales, ocasionalmente al Ejército, pero sin ninguna conexión entre ellos y carentes de los medios más elementales para cumplir con eficacia la misión que se les había confiado.

El primer Decreto que ordena la creación de la Guardia Civil lleva la fecha de 28 de marzo de 1844. Sin embargo, no llegó a entrar en vigor: la excesiva dependencia de las autoridades civiles podría dar lugar a que las fuerzas de orden público fueran manipuladas en un determinado sentido, frustrándose así el propósito del legislador de crear un instituto desmilitarizado.

Meses más tarde ve la luz el Decreto de 13 de mayo del mismo año, el cual debe de considerarse como el punto de partida en la organización de la Guardia Civil: proveer al buen orden y seguridad pública y protección a las personas y a las propiedades, dentro y fuera de las poblaciones, eran las misiones encomendadas al naciente Instituto, el cual, según el artículo 1.º, dependería del Ministerio de la Guerra en todo lo relativo a organización, personal, disciplina, material, percibo de haberes, y del Ministerio de la Gobernación en lo relativo a su peculiar servicio y movimiento.

Estaba claro que la intención del legislador no era otra que la de crear unos agentes del orden vestidos de carácter militar, lográndose de esta suerte un policía militar o un militar policía apto para misiones de paz y de guerra, de eficacia y sacrificio. Precisamente esta cobertura militar es la que ha armado la fortaleza al Cuerpo, al proporcionarle una sólida organización de autoridad respaldada por leyes, ordenanzas y códigos castrenses, que han obligado a una compacta y recia disciplina y a un indeclinable sentido del deber.

Las leyes constitutivas del Ejército de 28 de noviembre de 1878 y la de 19 de junio de 1889 recogen esta condición de carácter de Cuerpo militar del Ejército, y sigue manifestándose en la Ley de 15 de marzo de 1940 y

más recientemente en el artículo 20 del Real Decreto de 2 de noviembre de 1977.

Del examen de los textos legislativos enunciados quedan nítidas, contundentes y categóricas estas dos afirmaciones: primera, la Guardia Civil es parte integrante del Ejército de Tierra; la segunda, y derivada de la primera, es su carácter militar indiscutible.

A lo largo de nuestro epiléptico siglo XIX —epiléptico por lo convulso y agitado—, la Guardia Civil cumplió con honor, abnegación y heroísmo las misiones encomendadas. No sólo erradicó el bandolerismo, sino que sus servicios humanitarios en las epidemias de cólera, inundaciones e incendios, calamidades públicas y catástrofes motivaron que el pueblo español la adjetivara como benemérita, y en verdad que lo era. En verdad que no era nada fácil saberse mantener en su sitio en aquel mar embravecido de pasiones, acosados por un terrible caciquismo rural y sacudidos por los bandazos políticos.

Actualmente, aunque la Dirección General de la Guardia Civil forma parte orgánica del Ministerio de Defensa y el personal del Cuerpo tiene un carácter totalmente militar, sin embargo, debe hacerse notar su triple dependencia en el escalón nacional. Así depende del Ministerio de Defensa en lo relativo a organización, instrucción y armamento del Ministerio del Interior administrativamente y en todo lo referente al servicio rural, orden público y tráfico de carreteras; finalmente, del Ministerio de Hacienda en lo relativo a la persecución de contrabando y defraudación. Pues, no obstante, esta múltiple dependencia, en la práctica no se ha suscitado fricción alguna en esas jurisdicciones tangenciales, y ello hay que anotarlo en el buen hacer de los miembros de la Institución.

Al discutirse el artículo 8.º de la nueva Constitución quedó perfectamente claro en los distintos debates parlamentarios que no era necesario mencionar expresamente a la Guardia Civil como perteneciente a las Fuerzas Armadas, toda vez que ya estaba integrada en el Ejército de Tierra y ello hubiera constituido una reiteración innecesaria.

En este mismo sentido, al debatirse el artículo 14 de la Ley de Policía, un Diputado tan caracterizado como el señor Sancho Rof, a la sazón Subsecretario del Interior, afirmó:

«La Guardia Civil, que anteriormente tenía fuero militar, entra dentro de la Constitución en el Ejército de Tierra. La Guardia Civil —añade— es Ejército de Tierra dentro de su reglamento, ordenanzas y estatutos. En este sentido, al hablar de Fuerzas Armadas está incluida la Guardia Civil, que es, tradicionalmente y desde su fundación, Ejército de Tierra».

Consecuentemente con estos precedentes legislativos, el Gobierno, al remitir a las Cortes el proyecto de ley orgánica por el que se regulan los criterios básicos de la Defensa y la organización militar, establecía en el artículo 38 que «la Guardia Civil es un Cuerpo Militar que, como tal, forma parte del Ejército de Tierra y depende en su organización, personal, disciplina, armamento y servicio militar del Ministerio de Defensa». Y en el párrafo segundo añadía: «En el desempeño de las funciones relativas al orden y seguridad públicas depende del Ministerio del Interior, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica sobre Seguridad Ciudadana».

Sin embargo, el texto aprobado por el Congreso y remitido al Senado quedó redactado de la siguiente forma: «En tiempo de paz, el Cuerpo de la Guardia Civil dependerá del Ministerio de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que por su naturaleza se le encomienden, y del Ministerio del Interior en el desempeño de las funciones relativas al orden y la seguridad públicas, en los términos que establece la ley orgánica prevista en el artículo 104 de la Constitución».

Como se aprecia por la simple lectura, la diferencia entre los dos textos es abismal. El proyecto suscita estas dos interrogantes: ¿sigue la Guardia Civil formando parte del Ejército de Tierra? ¿Conserva su carácter militar? La respuesta tiene una sola palabra: no. En efecto, el texto remitido por el Gobierno era de una claridad y ortodoxia meridiana. En cambio, el proyecto del Congreso guarda un silencio sepulcral sobre la integración de la Guardia Civil en el Ejército.

En cuanto a su carácter militar, es evidente que aunque se le encomienden misiones de tal orden ello no quiere decir que necesariamente haya de tener un carácter militar, ya que misiones de tal naturaleza pueden ser

encomendadas también a otros Cuerpos, incluso administrativos. La dependencia orgánica de la Guardia Civil, que antes estaba fuera de toda duda, es sustituida ahora por una dependencia funcional, con lo cual queda flotando en el aire como un asteroide suelto.

La integración de la Guardia Civil en el Ejército no es fruto del capricho ni del puro arbitrio; es una exigencia impuesta por la propia naturaleza del Instituto y de las misiones a él encomendadas. Desde su creación se quiso que fuera un Cuerpo despolitizado, no manipulado por los partidos políticos. Las funciones que hoy tiene encomendadas constituyen un entramado complejo y perfecto que ha logrado una eficacia singular. En la persecución de la delincuencia tiene un valor excepcional la información. Sin un servicio de información penetrante, ágil y sensible, el poder público y la sociedad están indefensos. La Guardia Civil realiza unos servicios de información íntimamente relacionados con la seguridad nacional, con la seguridad del Estado, y tanto la seguridad del Estado como la seguridad nacional son temas que deben de importar al partido político que ocupa el poder y también al partido político que aspira a ocuparlo.

La integración con el Ejército y su carácter militar son medulares, esenciales, constituyen la entraña de la Guardia Civil. Privarles de este carácter es arrancarles el alma. Seguirán con el tricornio y el mismo uniforme, pero por dentro serán otros hombres.

La Guardia Civil es un Cuerpo idóneo para unas circunstancias de excepción, por dos razones: primera, porque es mixto, y, segunda, porque el Ejército debe ser siempre el último en salir a la calle para defender al Estado. A los que están orgullosos de una carrera militar no se les puede decir de la noche a la mañana que son otra cosa para hacer lo mismo que hacían. La Guardia Civil es Guardia Civil por lo que hace y por donde actúa. Tiene una organización militar porque el terrorismo y las modernas delincuencias son a veces mafias, bandas y colectivos que tienen su estrategia y realizan sus operaciones. Frente al terrorismo nacional o internacional, frente a la delincuencia organizada con bases, orígenes y objetivos exterior-

res, señores, la Guardia Civil tiene que ser necesariamente militar.

Si ésta es una ley de bases, lo lógico es recoger en su texto, por lo que afecta a la Guardia Civil, los principios básicos que han de presidir su estructura y organización, y no encontramos otros que sean más básicos que los enunciados. No vale la excusa de decir que tales principios pueden ser recogidos en una ley posterior que desarrolle ésta de bases, porque entonces se puede argumentar que esta segunda ley no puede ir más lejos que la ley de bases, en la cual, cuidadosamente, ya se ha silenciado el carácter militar. Pero, por otra parte, señores, el artículo 104 de la Constitución, en su párrafo segundo, dice de manera terminante y categórica que una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos, actuaciones y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Hay un extremo de suma importancia sobre el cual queremos llamar la atención. Por el Real Decreto 2.923, de 2 de noviembre de 1977, que estructura el Ministerio de Defensa, se define al Centro Superior de Información para la Defensa, el llamado CESID, como el órgano encargado de obtener, evaluar, interpretar y facilitar al Ministro de Defensa cuanta información sea necesaria para lo relacionado con la defensa nacional, atendiendo prioritariamente a la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Actualmente la Guardia Civil informa directamente al CESID y éste lo hace al Gobierno y, en algunos aspectos concretos, la Guardia Civil informa directamente al Ministro del Interior. No es probable que esto varíe, pero hay que preguntar: ¿seguirá conservando la Guardia Civil el Estado Mayor, que es del Ejército de Tierra, como en la actualidad? En caso afirmativo no hay nada que objetar, pero en caso negativo las Fuerzas Armadas podrían encontrarse sin información, porque aunque el jefe del CESID es un General del Ejército de Tierra, la Guardia Civil podría dar al CESID sólo la parte de la información que quisiera y, en cambio, podría dar al Ministro del Interior toda la información.

De otra parte, la concentración de unidades de la Guardia Civil ya anunciada tiene y puede traer como consecuencia, en cuanto a operatividad del Cuerpo, la pérdida de capa-

cidad informativa y del tradicional arraigo e integración de la Guardia Civil en el pueblo, en los medios rurales. Y, de otro lado, señores —y esto es gravísimo—, puede dar lugar a la existencia de un Ejército profesional paralelo, con unidades muy potentes y organizadas, sin conexión alguna, o muy tibia, con las Fuerzas Armadas, manejado directamente por el poder político para sus intereses partidistas y no para los intereses del Estado. En último término, agravándose las cosas, esto podría dar lugar a graves enfrentamientos.

Sin desmelenamientos innecesarios, sin dramatismos, pero con la firmeza que da un convencimiento íntimo y profundo, yo denuncio que el texto del artículo 38, tal como viene redactado en el proyecto, abre la puerta para en el futuro instrumentar legalmente la desmilitarización de la Guardia Civil. Es posible que algunos, con discutible buena fe, se resistan a creerlo y piensen que son presunciones alarmistas, gratuitas o temerarias. Cuando los hechos desgraciadamente lo confirmen, vendrán los tardíos y estériles arrepentimientos. Pero en política el muro de las lamentaciones ni consuela ni libera de responsabilidad.

Según nos ha informado la prensa...

El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, Senador Pinilla.

El señor PINILLA TURINO: Señor Presidente, ruego un poco de tiempo.

El señor PRESIDENTE: Tenemos por delante todo el tratamiento del articulado y, en su momento, el artículo 38, al que está centrando su intervención. No lo he rebatido porque está haciendo uso de su derecho en un turno en contra, pero es que ha terminado su tiempo para dicho turno. Tiene luego el artículo 38 para volver a insistir. Termine, por favor.

El señor PINILLA TURINO: Señores, la gente a nivel de la calle, a la vista de este proyecto de ley, se pregunta cuáles son las intenciones, no confesadas, que esconde esta reforma. ¿Se trata acaso de crear un «status» legal que permita en un momento determi-

nado sacar a la Guardia Civil del País Vasco mediante una simple medida gubernativa? Si no existe peligro alguno para la Guardia Civil en el texto nuevo de esta ley, ¿por qué no la dejamos como estaba? ¿Se prepara, señores, tal vez la creación de una Guardia Nacional, con integración de todas las Fuerzas de Seguridad del Estado, en la cual quedaría disuelta, diluida, la Guardia Civil?

La Guardia Civil y el pueblo español tienen derecho a saber de modo claro, sin sombras ni dudas, qué va a pasar con este Cuerpo militar. No es lícito tenerlo sometido a la tortura mental de su incertidumbre. Mientras tanto cunde la sospecha de que la Benemérita puede haber sido el precio de una negociación y hay cosas sobre las cuales no se puede negociar de espaldas a España.

La Guardia Civil, señores, no es la del «Crimen de Cuenca», sino también la que día y noche en la serranía inaccesible de Gredos buscó al hijo del Diputado Socialista Pablo Castellano, mereciendo por ello la atenta felicitación y la admiración del líder socialista Felipe González.

Las Cortes son soberanas para negar a la Guardia Civil el honor de formar parte del Ejército español; las Cortes son libres para escamotearle su carácter de Cuerpo militar. En justa réplica, las madres, las viudas y los huérfanos de los que fueron inmolados en el cumplimiento del deber podrían gritarnos: devolvednos nuestros muertos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Duarte, por el Grupo Socialista Andaluz.

El señor DUARTE CENDAN: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, el señor Ministro hace un momento decía que ésta es una ley que importa a todos, y acertaba. Importa a todos los españoles, importa a todos los miembros de esta Cámara, importa naturalmente a los partidos de izquierda; importa, por supuesto, al Partido Socialista Obrero Español y a mi Grupo Parlamentario. Importa mucho cuál es el futuro, cuál va a ser la organización, cuál va a ser el mando, quién y cómo va a dirigir nuestras Fuerzas Armadas.

No teman Sus Señorías que les vaya a cansar hoy, porque precisamente en una ley militar me voy a imponer dos condiciones: una, el laconismo, la brevedad, que seguramente le gustaría a los militares que pudieran oírme, y, otra, una claridad meridiana, que va haciendo falta en este país. Vamos a hablar a las Fuerzas Armadas, cara a cara, de tú a tú, como corresponde.

Señoras y señores Senadores, a lo largo de muchos siglos este país ha venido debatiéndose en tres grandes cuestiones: la cuestión religiosa, la cuestión militar y la cuestión social. Si bien esta última cuestión social dista mucho de estar resuelta, la cuestión religiosa, vimos el otro día, con la intervención de mi compañero señor Arbeloa, cómo parecía que definitivamente había sido resuelta, y cómo la desdramatización, el clima distendido de esta Cámara demostraba que así había sido. Y hoy, si no hubiera sido por la intervención del señor Senador anterior a mí en el uso de la palabra, también parecía y parece —estoy seguro que va a ser así— que se va a resolver, en el clima feliz y distendido con que se resuelven en esta Cámara los problemas que han pasado a ser problemas históricos, y que ya no son problemas que nos atañen violentamente y que nos dividen fratricidamente.

La cuestión militar —no hace falta ni voy a hacer un repaso histórico— saben ustedes que a lo largo del siglo pasado y lo que va de éste ha ensangrentado nuestro país hasta extremos inconcebibles en un país civilizado. Por eso hoy quisiéramos levantar acta de que estos enfrentamientos, estos derramamientos de sangre entre hermanos han terminado definitivamente. Y no va a ser —quisiera contestar al señor Ministro, pero no está aquí— sometiendo el llamado poder militar al poder civil, porque no existe un poder militar y un poder civil. No existe más que un poder, que es el poder reconocido en el número 2 del artículo 1.º de la Constitución: la soberanía reside en el pueblo, y no es más que poner a todos a las órdenes, a disposición de quien ostenta la soberanía, y en este país, desde que se promulgó su Constitución última (yo diría desde que se promulgó la Constitución de Cádiz, en 1812), no existe más que un soberano, y ése es el pueblo.

Lamentablemente con esta ley se ha perdido una ocasión histórica (y lo digo desdramatizadamente también), se puede haber perdido una ocasión histórica. Porque la Constitución, en su artículo 8.º, imponía la necesidad de una ley orgánica, y una ley orgánica es una cosa muy seria. Teníamos la oportunidad de haber hecho una gran ley orgánica que encajara toda la problemática militar en este país. Sin embargo, hemos tenido la debilidad de no enfrentarnos a estos problemas con toda nuestra fuerza y hemos hecho una ley de criterios básicos. ¿Qué puede ser una ley de criterios básicos, que no es ni siquiera una ley de bases? Es sencillamente lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad al presentar a las Cortes las ideas generales de la reforma sanitaria. Aquí no se han presentado como ley orgánica las ideas generales de una organización de la Defensa nacional. Yo creo que es una ocasión histórica perdida.

Aunque el Congreso haya mejorado algo esta ley, aunque el Senado haya hecho lo imposible por mejorarla, sin conseguirlo —por lo menos mi partido y los partidos que con él trabajan—, yo diría que en dos o tres aspectos fundamentales hemos perdido una ocasión. Hemos perdido una ocasión porque, permítanme el inciso, esta ley es en realidad un catálogo de leyes, esta ley remite a ocho leyes; esta ley, que debía ser de criterios básicos, cuando tiene que fijar criterios básicos es cuando renuncia a fijarlos y los transmite, los encomienda, a una ley posterior, que no va a ser orgánica, como bien ha dicho mi antecesor en el uso de la palabra.

Por ejemplo, cuando tiene que determinar cuál es la organización territorial de los Ejércitos en España lo remite a una ley, y deja a esa ley, que no va a ser orgánica, cosas tan importantes como quién tiene la última palabra en la administración de la justicia militar. De manera que se va a dejar sólo al Código de Justicia Militar, y no a esta Ley Orgánica, la definición de quién tiene la última palabra en las Regiones, si es que existen las Regiones militares, que tampoco se sabe, porque no se define; quién va a tener la última palabra en este aspecto.

Cuando se habla de movilización, por ejemplo, del servicio militar, tampoco se dice cómo se va a movilizar a los españoles, y no se deja

a una ley posterior como se deja a una ley posterior el desarrollo de la industria de defensa.

Yo quisiera decir aquí solemnemente que los militares son ciudadanos de uniforme y, por tanto, a los militares también alcanza la Constitución, y a los militares alcanzan los derechos fundamentales que en ella se reflejan, y yo quisiera dejar bien claro aquí que esta ley tenía que haber sido la ocasión, la última ocasión constituyente de dejar señaladas las limitaciones que al uso de los derechos fundamentales que la Constitución establece se imponen a los militares. Esos ciudadanos de uniforme resulta que pasan de tener todos los derechos que la Constitución les señala a tenerlos recortados por leyes que ya no son orgánicas, que van a ser las leyes que desarrollen el estatuto de la profesión militar. Esta es una grave cuestión —y es una grave cuestión que hay que decir a los militares— que ustedes no han contemplado. Ustedes van a recortar derechos como el de reunión o como el de asociación, etc., de los militares, por leyes que no son orgánicas. Han perdido la ocasión de hacerlo dentro de la Constitución.

Tiene la ley otros aspectos positivos y por eso nosotros vamos a votar a favor. Tiene aspectos positivos como el señalar que los Presupuestos de Defensa pasan por estas Cámaras, porque es curioso que en el proyecto del Gobierno (que parece, según los rumores, que no viene directamente de este Ministerio, sino que ya estaba hecho en otros Ministerios) se dice que van a pasar los Presupuestos por estas Cámaras, cuando no venía así en el proyecto inicial. Es decir, señores, había una opinión, un proyecto del Gobierno que hurtaba a la soberanía popular que he mencionado al principio temas tan importantes como los gastos de defensa. Afortunadamente, esto está ya incluido.

No están incluidos, en cambio, asuntos tan graves como el objetivo de fuerza conjunto. Este es un tema que se va a desarrollar con todo pormenor por mis compañeros de Grupo o por mis compañeros de partido.

Asunto tan importante como señalar quién dirige la guerra, ha quedado definitivamente establecido, y ha quedado definitivamente plasmado en una ley orgánica cómo está cons-

tituida la Junta de Defensa Nacional. Son aspectos positivos que justificarían, si no por otras razones, el voto afirmativo de mi partido.

En consecuencia, Señorías, para resolver definitivamente la cuestión militar en nuestro país, estamos a la espera de que se desarrollen estas ocho o nueve leyes que tienen que dimanar de la presente. Esperamos, no obstante, que esta sesión sirva para levantar acta de que el problema militar, que el problema de enfrentamientos entre esos que llaman civiles y esos que llaman militares, que no son más que los españoles al servicio de su patria, quede definitivamente resuelto.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista del Senado, su portavoz, señor Labora, tiene la palabra.

El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, Señorías, no tenía pensado intervenir, pero el hecho de que hayan intervenido portavoces anteriormente y que se haya anunciado la participación de los portavoces de todos los Grupos me ha movido a hacer una brevísima declaración en el turno de portavoces.

Efectivamente, la ley ha sido suficientemente valorada, tanto por el Ministro como por mi compañero Duarte Cendán. En términos generales, los socialistas vemos la ley como una ley aceptable, una ley positiva, que dependerá, en su plasmación en la realidad, del desarrollo posterior legislativo a que se remite.

Yo creo que, en cualquier caso, nos iniciamos ahora en esa reforma de la organización militar española, reforma que el propio Ministro ha anunciado en esta tribuna hace unos momentos; y creo que se está realizando esta reforma dentro de unos términos que considero necesario destacar. Hay unas relaciones entre los representantes de la soberanía nacional, incluso entre los miembros de los partidos políticos —que al fin y al cabo realizan en el seno de la sociedad civil la traducción de las aspiraciones políticas— con los miembros de las Fuerzas Armadas, que han cambiado sustancialmente respecto a lo que era la situación anterior a la Constitución. Ahora acudimos a las celebraciones militares, con-

versamos con los militares acerca de estos temas, manifestamos nuestros puntos de vista, y todo eso se traduce en términos de respeto mutuo, estableciendo con claridad dónde está cada cual y, por supuesto, la supeditación de todas estas cuestiones legislativas a los detentadores de la soberanía nacional. Yo creo que hay un clima distinto en las relaciones entre miembros de los partidos políticos —yo subrayaría «entre los miembros de los partidos políticos de izquierda»— y la autoridad militar.

Si me permiten Sus Señorías, yo les puedo decir que para mí fue una experiencia verdaderamente reveladora, y al mismo tiempo aleccionadora, y yo diría que hasta intensa y emocionante, el hecho de que como representante elegido en 1977, yo pudiese entrevistarme con el Capitán General de mi región, que reside en la ciudad en que yo vivo. En aquellas circunstancias, que eran especialmente tensas porque era el año 1977 y el día siguiente en que fuera asesinado el industrial vasco, señor Ybarra, sentado en la silla de enfrente al Capitán General, tuve que hacer comentarios políticos respecto a la situación en la que estábamos viviendo y contestar a sus preguntas sobre qué es lo que entendíamos los socialistas en cuanto a la situación y por qué estábamos dispuestos a proponer una amnistía general, que era uno de los temas que nos llevaba con prioridad a las Cortes Generales. Ustedes comprenderán que, en aquella situación, es especialmente peliagudo el poder explicar algo, cuando se encuentra a una persona crispada y afectada en sus íntimos sentimientos, con la frialdad de la que uno es capaz lo que son las grandes líneas de lo que iba a ser posteriormente la democracia y la Constitución, que, por supuesto, se basaba en torno a la amnistía.

Creo que estas experiencias nos indican el marco, el tipo, de relaciones de mutuo respeto, de profundidad, de comprensión, que se establecen entre los representantes de la soberanía nacional y las Fuerzas Armadas.

Nosotros hemos intentado aquí, a través de nuestras enmiendas —alguna mera repetición de las enmiendas fracasadas en el Congreso de los Diputados; otras hechas por el Grupo Socialista del Senado— mejorar la ley

dentro de esta concepción general que de la defensa tenemos los socialistas.

Hemos querido que haya una participación de las Cortes Generales en la fijación de unos objetivos de Fuerza conjunta. Hemos querido reorganizar o reordenar más precisamente las competencias del Presidente del Gobierno en relación con el Ministro de Defensa. Vamos a intentar explicar aquí la necesidad que hay en torno a una definición en que se menciona el patriotismo (en el texto está confundida y creo que se hace referencia al fomento del patrimonio), el fomento y desarrollo del patriotismo. Vamos a intentar explicar que nosotros no creemos que ese término deba estar, porque está dentro del contenido general de la Constitución. Queremos hacer algunas precisiones claras. Yo creo que es una enmienda, por ejemplo, la del artículo 18, en la que precisamos quién es —y decimos que el Gobierno— el que fija la asignación de los recursos financieros. Es una enmienda absolutamente aceptable, que no entiendo por qué no se ha aceptado ya en Comisión y que no sé si se va a aceptar aquí en el Pleno. Me temo que no.

Intentamos mejorar la coordinación de las fuerzas militares con las fuerzas civiles en los casos de catástrofes, como inundaciones, etc.; la coordinación también entre los Ejércitos, que es la enmienda nuestra al artículo 24, que hace referencia al armamento, tipo de municiones, etc., ya que nosotros pensamos que debe ser la Junta de Jefes de Estado Mayor en vez de los Estados Mayores, lo que crea una falta de conexión e incapacita esa coordinación.

Está el tema importante de regular por ley determinadas situaciones, en concreto la de la disponibilidad forzosa, que está en el centro de la vida profesional de los militares españoles, y nosotros queremos que se regule por ley y no quede simplemente al arbitrio del Gobierno.

Está el tema del control aéreo, el tema del Cuerpo de los Controladores Aéreos, que nosotros quisiéramos salvar su dimensión civil de lo que pudiera entenderse como contrario en la propia ley.

También, por ejemplo, están los artículos 29 y siguientes. Nosotros creemos que una ley que, al fin y al cabo, es una ley general,

de términos generales, no debe precisar tanto como el señor Ministro ha dicho. Hay unas precisiones que nosotros juzgamos que son necesarias, porque hay unas precisiones respecto a la organización del Ejército de Tierra y de la Armada, que es forzar algo que está en estos momentos en período de cambio. En período de cambio en comparación, por ejemplo, con lo que existe en la Marina, e imposibilita, por tanto, que los cambios se pueda producir fuera de los términos generales de la ley.

Está el tema de la Guardia Civil, a que el señor Pinilla ha dedicado la mayor parte de su intervención para señalarlos que está en contra de la ley. Supongo que estará en contra del artículo 38, y hubiera sido más propio que hubiera intervenido en el turno del artículo 38 para hacer las enormes manifestaciones que ha hecho. El tema lo discutiremos en el artículo 38. Solamente le quiero decir —por si a él le interesa— que hubo una coincidencia entre, por ejemplo, el Grupo del Gobierno y el Partido Socialista en cuanto a la definición que aparece en el artículo 38; que el Partido Socialista votó en contra de una enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, que pretendía que la definición de la Guardia Civil fuera una definición como policía, sin más. Es decir, esta no era la filosofía. Luego hablaremos de lo que entendemos dentro de ese organigrama que nosotros expusimos y que podremos repetir aquí. Creo que no existe tanta expectación, señor Pinilla, respecto a este tema, ni dentro de la opinión pública ni, me atrevo a señalar, dentro del propio Cuerpo de la Guardia Civil.

Creo que hay una cierta campaña, a través de los medios de Prensa, para intoxicar a la opinión pública y con todo el respeto le tengo que decir, señor Pinilla, porque yo también leo esa Prensa, que sus precisiones, sus manifestaciones en esta tribuna coinciden plenamente con lo que han sido los editoriales, dando un tratamiento distorsionante bastante fantástico de las consecuencias de la enmienda transaccional aprobada por el Congreso respecto del artículo 38.

Quiero decirle una cosa, señor Pinilla, porque no se si a usted se le ha escapado como un «lapsus», pero en —diríamos— esas deducciones un tanto exageradas que ha hecho de

las consecuencias del artículo 38, ha venido a decir —creo haberlo entendido así— que esa definición que está en el artículo 38 podría dar lugar a que un Gobierno manipulara a un Cuerpo que tiene una gran importancia de fuego. ¿Contra qué? No lo sabemos exactamente.

Bien, señor Pinilla, eso supondría la destrucción del Estado de derecho. Yo le puedo decir que usted está en contra de esta ley, y que quienes apoyamos esta ley, que quienes estamos apoyando esta ley no estamos ni estaremos jamás porque a través de las instituciones o fuera de ellas pueda destruirse el Estado de derecho, y, afortunadamente, somos mayoría en este país.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de PCD, su portavoz, señor Villodres, tiene la palabra.

El señor VILLODRES GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, el artículo 8.º de la Constitución, en su número 2, establece que «una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución». En cumplimiento de este mandato constitucional se elabora este proyecto de ley.

El dictamen de la Comisión, que dentro de unos momentos se va a someter a este Pleno, coincide con el texto remitido por el Congreso de los Diputados, porque, como Sus Señorías conocen, no se han introducido enmiendas en la Comisión. Unión de Centro Democrático está de acuerdo con el principio, espíritu y oportunidad de este proyecto y con el texto recibido, que fue aprobado en el Congreso de los Diputados por 291 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Creo que ninguna ley orgánica ha tenido un respaldo tan fuerte.

El proyecto persigue cimentar la defensa y los Ejércitos españoles dentro del marco de un Estado democrático, como punto de partida de una reforma militar emprendida con criterios de modernidad, de visión de futuro, de coordinación y de eficacia.

En este texto, en su artículo 23, se recoge la definición que de las Fuerzas Armadas proporciona el artículo 8.º, 1, de la Constitución: «Las Fuerzas Armadas tienen como

misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».

Hasta tal punto el legislador ha tenido presente la Constitución y el ordenamiento constitucional en la elaboración de este proyecto de ley, que en la tercera parte de sus artículos se hace constar, se alude directamente a la Constitución o al ordenamiento constitucional. Se puede decir que los criterios básicos respiran por todos sus poros un saludable aire constitucional, como no podía ser menos, siendo las Fuerzas Armadas garantes de dicho ordenamiento.

Por su propio carácter de proyecto de ley orgánica servirá de plataforma para continuar la reforma militar en su desarrollo armónico y coordinado de la defensa, como ha dicho el señor Ministro de Defensa.

El proyecto, que parte de un concepto moderno y global de la defensa, permitirá, mediante su ulterior desarrollo, la consolidación de los ejércitos que demanda la España del año 2000. El propio proyecto en su articulado ya adelanta cuáles serán algunos de los siguientes pasos en la reforma. Así, se hace referencia a una serie de próximas leyes, como la de Movilización Nacional, en el artículo 14; Potenciación de Industrias de Interés para la Defensa Nacional, en el artículo 17; la del Estado de Sitio, orgánica, según el artículo 116, 1, de la Constitución, en el artículo 20; la de Escalas, Ascensos, Recompensas, etc., en el 26; la de Enseñanza Militar, en el 27; la del Servicio Militar, en el 37.

La realidad demanda unos Ejércitos modernos y no dudamos que esa finalidad se marca en esta ley de criterios básicos. Nuestras Fuerzas Armadas actuales, numerosas en efectivo, no están suficientemente dotadas de material, y su infraestructura debe adecuarse a las necesidades de adiestramiento como una visión a medio y largo plazo, que no excluya, evidentemente, la resolución de los problemas que a corto plazo existan. En la «mili» a los soldados el valor se le supone. A nuestros Ejércitos no hay que suponerles el valor, porque lo han demostrado sobradamente a lo largo de la historia. Pero la historia avanza y el valor debe de acompañar-

se de los medios y las técnicas adecuadas para hacerlo efectivo.

La defensa es cosa de todos, nos ha dicho el señor Ministro de Defensa. El concepto de la defensa no es privativo, al contrario, afecta a todos los individuos, organismos, actividades y recursos de la Nación. Esta no es sólo cosa de los militares; concierne a todos españoles. Lo dice el artículo 2.º del proyecto expresamente y se reitera en otros artículos al señalar, por ejemplo, en el artículo 14, que la base fundamental de la defensa son los propios ciudadanos; en el 21, al referirse a la defensa civil; en el 25 alude al deber y derecho de todos los españoles a participar en la defensa del Estado. Desde esta perspectiva hay que contemplar asimismo la referencia del artículo 36 a la forma de participación de la mujer en la defensa nacional.

Naturalmente, la defensa es cosa de todos, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Y las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, como representantes del pueblo español, tienen una específica forma de participar en la defensa a que se refiere el artículo 6.º del proyecto, debatiendo leyes relativas a la defensa, presupuesto, los Tratados, las líneas generales de la defensa y controlando en definitiva la acción del Gobierno y de la Administración militar. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Continúe señor Villodres.

El señor VILLODRES GARCIA: La Disposición final del texto se refiere en el mismo sentido al calendario de presentación a las Cortes Generales de los proyectos de ley que se determinen en esta Ley Orgánica de criterios básicos.

El señor Pinilla, en el turno en contra en relación con el debate a la totalidad, creemos que se ha confundido, porque se ha limitado, como se ha dicho, al artículo 38, relativo a la Guardia Civil, y realmente tenemos curiosidad por los argumentos que va a dar cuando le toque la defensa de este voto particular, al que se le contestará en su momento oportuno, pero creemos necesario hacer algunas precisiones en estos momentos, señor Pinilla.

Una Ley Orgánica de criterios básicos no descende, por su propia definición, a concreciones propias de las leyes ordinarias que han de desarrollarla posteriormente. La Guardia Civil ha sido siempre un Cuerpo militar del Ejército de Tierra y seguirá siéndolo mientras una ley no diga lo contrario. Esta ley refrenda esa naturaleza, porque no la niega, aunque no descienda al detalle de consignarla, porque ese tipo de detalles, tanto en este tema como en otros que contempla la ley, serán objeto de ulterior tratamiento legislativo. En el caso de la Guardia Civil, en la Ley de Organización Militar y no en ésta se desarrollarán los detalles relativos al Cuerpo. En esta ley se resuelve el problema de la doble dependencia del Cuerpo del Ministro de Defensa y del Ministro del Interior.

Algunas veces minoritarias han intentado sembrar la confusión en este asunto de la Guardia Civil y quienes así actúan realmente no contribuyen a la defensa nacional por muy patriotas que se digan.

En el artículo 2.º de esta Ley Orgánica se dice que la defensa nacional es la disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación.

Pues bien, los intentos de confundir socavan la moral y actúan en contra de la defensa nacional. Las energías y las fuerzas morales son tan importantes como los más sofisticados armamentos. Sepa la Guardia Civil que no se discute su carácter de Cuerpo militar; mantenga su moral alta como siempre y continúe como ahora dando ejemplo de patriotismo y de honor.

Y no es lícito, señor Pinilla, decir lo que la ley no dice para mantener una política partidista. Nada más y muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate del articulado.

Artículos
1.º a 4.º

Artículos 1.º a 4.º no han sido objeto de votos por lo que procede someterlos directamente a votación.

¿Se pueden considerar conjuntamente? (*Pausa.*)

¿Se pueden considerar aprobados por asentimiento? (*Pausa.*)

Se aprueba por asentimiento.

Hay un voto particular del Grupo Cataluña, Democracia i Socialisme, en correspondencia con la enmienda número 26, que postula la inclusión de un nuevo número 3 en el artículo 4.º Como defensor portavoz del Grupo, el Senador Ferrer tiene la palabra para la defensa del voto particular.

El señor FERRER I GIRONES: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, nuestro voto particular tiene un carácter esencialmente técnico. No se espanten ustedes de que yo sea versado en cuestiones técnicas, en cuestiones militares. He recibido asesoramiento. Además, los que me conocen, ya saben que hace años que no soy partidario del aforismo latino que dice: «Si vis pacem para bellum». Y hoy, antes de venir aquí, he ido a la Sala de los Pasos Perdidos a admirar un cuadro, que es el Moreno Carbonero, que indica la entrada de Roger de Flor con los almogávares en Constantinopla, para ver que el catalán —según dice Ferrán Soldevila— a través de la Historia ha sido un pueblo muy belicoso, lo que yo no soy.

No obstante, esta enmienda que nosotros presentamos la basamos en dos puntos muy claros: uno que es de forma y otro de fondo. La razón formal se basa en que, a nuestro entender, existe una política global; de esta política global se descende a una política internacional; de la política internacional se deriva a la política de defensa; de la política de defensa derivamos a la política militar y, dentro de la política militar, se debe trazar el plan estratégico que plasme en el mapa las amenazas y la respuesta a esas amenazas exteriores. Luego, el objetivo de fuerza, o sea, la cantidad y calidad de la fuerza que debe realizar el plan estratégico.

Si añadimos nosotros este párrafo que pretendemos, será un artículo mucho más coherente, sobre todo porque más adelante en la ley, en los artículos 11, 18, 23, etc., se habla del Plan Estratégico y se habla del Objetivo de Fuerza de Conjunto. Ahora bien, en ninguno de estos artículos que viene más adelante se menciona el origen del Plan Estratégico ni del objetivo de fuerza de conjunto. Es más, ni se define ni se describe, ni se sabe exactamente en qué consiste. Parece prudente y más coherente que nosotros aña-

damos este nuevo párrafo para explicar su origen al ciudadano y para que se vea que el legislador demuestra que es coherente.

Además de esto, también hay otra razón que es muy importante, que es la razón de fondo. El Plan Estratégico es una cosa que todo el mundo entiende, pero nosotros nos preguntamos: ¿Qué es el Objetivo de Fuerza de Conjunto? Se trata de un concepto nuevo que no está precisado en la ley. Si no se admite en nuestra enmienda, tampoco se sabrá por dónde viene ni de dónde emana este concepto. Además, en la legislación internacional comparada tampoco hemos encontrado dónde orientarnos respecto a esta nueva locución, y hay una cuestión grave: que la Cámara va a votar más adelante cuatro artículos donde se tratará de un término objetivo de fuerza de conjunto sobre el cual se tiene una inseguridad conceptual.

No basta con que se nos explique esto particularmente, o que nosotros lo sepamos de forma particular. Conviene que esto quede plasmado en la ley.

Por tanto, señores, nosotros vamos a votar a favor de este añadido al artículo 4.º para ser más coherentes con la ley y dar más claridad a las leyes que salgan del Parlamento. Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.)

¿Turno en contra? (Pausa.)

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Sólo el Senador Fombuena, por el Grupo Parlamentario de UCD, pide la palabra, y la tiene.

El señor FOMBUENA ESCUDERO: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, la enmienda presentada por el Grupo Catalán de esta Cámara es una repetición, corregida, de la que en su día presentó el mismo Grupo en el Congreso de los Diputados, y por las mismas razones por las que se opuso mi Grupo allí, nosotros nos vamos a oponer a esta enmienda de adición de un nuevo número al artículo 4.º Según ha manifestado el portavoz del Grupo, ellos entienden que el Plan Estratégico Conjunto y, por tanto, el Objetivo de Fuerza Conjunto, es una consecuencia de la política militar. Nosotros entendemos que no

y, naturalmente, desde posturas tan diferentes, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo.

El Plan Estratégico Conjunto y el Objetivo de Fuerza Conjunta no son una manifestación directa de la política militar, sino una manifestación de la política de defensa. Ellos en esta enmienda mezclan dos conceptos, como son la política de defensa y la política militar, y para razonar el porqué de nuestra negativa, yo haría una exposición del entramado legal que en este artículo 4.º ha tenido lugar, todo lo que ha incidido dentro de la ley para llegar a la redacción de este artículo 4.º, tal como lo hemos recibido en el proyecto del Congreso de los Diputados.

El Plan Estratégico Conjunto y el Objetivo de Fuerza Conjunta dependen de la política de defensa, y la política de defensa, naturalmente, es un concepto mucho más amplio que el de la política militar y, además, no puede circunscribirse exclusivamente al Plan Estratégico Conjunto y al Objetivo de Fuerza Conjunto.

El Objetivo de Fuerza Conjunta es una consecuencia del Plan Estratégico Conjunto, porque forma parte de él, está integrado en ese Plan Estratégico Conjunto. A su vez, el Plan Estratégico Conjunto es una consecuencia de la política militar, pero a su vez la política militar, de acuerdo con lo que dice la Constitución y de acuerdo con la Ley 83/1978 en su artículo 3.º, 2, la determina el Gobierno, como, por otra parte, es obvio.

Por tanto, el Objetivo de Fuerza Conjunta es una consecuencia de algo que está por encima de él, que es la política militar, que está dentro de la política de defensa y que, por tanto, compete exclusivamente al Gobierno.

Creemos que con esto queda perfectamente claro el entramado legal, y como quiera que los concedores de este proyecto de ley sabemos que el quid de la cuestión en estos dos conceptos técnicos, Plan y Objetivo, se debate en el artículo 6.º, que también ha sido objeto de votos particulares por parte del Grupo Socialista, en este artículo profundizaremos más en estos conceptos y, de momento, anunciamos nuestro voto en contra de este voto particular, por cuanto creemos que es totalmente innecesaria la inclusión de esta enmienda de adición.

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia i Socialisme, en correspondencia con la enmienda número 26.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 56; en contra, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña, Democracia i Socialisme, en correspondencia con la enmienda número 26.

Se suspende la sesión durante diez minutos. (*Pausa.*)

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Senadores, en el curso de la suspensión por este breve tiempo, se ha reunido la Mesa en atención al mensaje que nos ha llegado de algunos portavoces interesados, en nombre de sus respectivos Senadores del Grupo correspondiente, que la sesión continuara hoy hasta el límite posible y se aplazara lo que quedara del orden del día hasta la próxima semana.

La Mesa, por unanimidad —repito, por unanimidad—, ha acordado que la sesión se levante seguidamente, porque la totalidad de sus componentes tiene hoy un compromiso ineludible, atendiendo que se trata de que nuestros invitados, la delegación parlamentaria mejicana, que encabeza el Presidente del Senado, es objeto, justamente esta noche, del único, digamos, acto de homenaje que las Mesas de ambas Cámaras le dedican como tal delegación.

Mañana, a las nueve de la mañana, se celebrará la sesión informativa que venía programada de la Comisión de Asuntos Exteriores en la que comparecerá para informar y debatir, en su caso, los puntos que se le planteen en relación con el tema de la reunión de la Conferencia de Seguridad y Cooperación a celebrar en Madrid, el señor Ministro.

A las once continuará el Pleno en la seguridad de que es necesario, a ser posible, concluir el orden del día. Pero, en cualquier caso, es ineludible terminar la aprobación del dictamen de la Ley de Defensa —por abreviar su denominación—, y esto es así, porque

el plazo constitucional termina el día 25, justamente en la fecha que también concluye el plazo para la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas, con otros textos legales más, que tienen que ser objeto de conocimiento, debate y aprobación de esta Cámara antes de que finalice el período ordinario de sesiones, para el cual sólo rentan el Pleno que está en curso y el de la próxima semana.

Pero, sin embargo, para que este acuerdo de la Mesa, que por supuesto es irrevocable, no parezca un acuerdo que se toma por capricho o porque a la Mesa, y al Presidente incluido, le guste estar aquí sentado, debo recordar a Sus Señorías, o quizá hacer saber, porque quizá a algunos no les llegó, que el día 26 de febrero la Mesa tomó el acuerdo de que las sesiones plenarias, en las semanas en que las hubiera, tuvieran lugar en las tardes de los martes, miércoles y jueves. Que, posteriormente, los señores portavoces, en la reunión del 4 de marzo, solicitaron de la Mesa que reconsiderase este acuerdo por lo que podía significar de trastorno el hecho de que se pudieran ampliar las sesiones hasta la tarde del jueves, interesando y surgiendo que pudiera revocarse o modificarse en el sentido de que en el supuesto de que los Plenos tuvieran que alcanzar hasta el jueves, la sesión a consumir fuera en la mañana del jueves, quedando entonces las mañanas del martes, miércoles y, en su caso, la tarde del jueves para reuniones de Comisiones.

La Mesa, en su reunión del 20 de marzo, prestó conformidad a la propuesta de los señores portavoces y así fueron informados el día 27 de marzo.

El Reglamento, como Sus Señorías deben saber establece que el jueves es el día parlamentario e, incluso, la mañana del viernes; pero por si no fuera bastante, este Pleno se convocó a sabiendas de que duraría los días 17, 18 y, en su caso, el 19. También así se habló en la reunión de portavoces de ayer y tuvieron noticias todos los portavoces de que por la duración previsible, cronométricamente previsible —y nos da la razón la duración de este Pleno—, esta vez sí que no habría posibilidad de hacer la gracia de que termináramos el miércoles, cualquiera que fuese la hora, aunque fuese ya en la madru-

gada del día siguiente, porque era, naturalmente, previsible que habría que alcanzar al menos al jueves.

En estas condiciones, por consiguiente, doy por notificada a la Cámara de que éste es el acuerdo de la Mesa; de que el acuerdo tiene unas bases objetivas y que no hay más remedio, Señorías, de que mañana, los que tengan la obligación y el deber, por ser miembros de la Comisión de Exteriores, de estar a las nueve de la mañana allí y concurrir al Pleno a partir de las once —en la voz de Sus Señorías está la agilidad que pueda tener el debate o la demora que pueda producirse

en relación con su terminación—, y que la Comisión de Justicia e Interior deberá reunirse inmediatamente de concluida la sesión plenaria, es decir, a partir de concluida la sesión plenaria, el señor Presidente de la Comisión de Justicia e Interior se servirá pasar a la Presidencia de la Cámara la nota de la hora en que será convocada la Comisión de Justicia e Interior, una vez conocido el término de la sesión del Pleno.

Por hoy, se levanta la sesión.

Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.

Precio del ejemplar 50 ptas.
Venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.

Paseo de Onésimo Redondo, 36

Teléfono 247-23-00, Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.550 - 1961

Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID